

REVISTA

REDar

n° 3 / año 2 / enero - junio de 2017

ISSN 2525-1155

Número temático

Archivos institucionales y centros de documentación de universidades nacionales: experiencias, normativas, proyectos en marcha y desafíos político-archivísticos

Presentación

Laura M. Casareto

Breve reseña de legislaciones que afectan la gestión de documentos y archivos en el ámbito de las universidades nacionales

Mónica G. Pené

Aportes a la comprensión del pasado reciente de las universidades nacionales a través del Archivo de la Fuerza Aérea

Laura Graciela Rodríguez

Construcción colectiva del Centro de Documentación "Universidad y Dictadura" Cátedra Libre de DDHH-FFYL-UBA
Samanta Casareto; Alba Lombardi

Archivos, memoria, verdad y justicia: la reparación de legajos de no docentes, docentes, estudiantes y graduados de la UNLP

Myriam Hara; Natalia Salcedo; Gerardo Bares; Ayelén Fiebelkorn; Lucía Gandolfi Ottavianelli

Organización de las obras planas de la DGCyM de la UNLP. Necesidad del abordaje archivístico para garantizar su accesibilidad

Ivana Farella; Mariela Amor



RED de ARCHIVEROS
graduados de Córdoba

Revista REDar

ISSN 2525 - 1155

nº 3 / año 2 / enero – junio de 2017

Publicación de la RED de Archiveros Graduados de Córdoba
Córdoba, Argentina

CONTACTO

redarchiveroscordoba.com

editorial.ragcba@gmail.com

Dirección postal: Juan Bautista Charlone N° 5714. CP 5119



Los artículos expresan las opiniones de los autores



REVISTA REDAR por RED DE ARCHIVEROS GRADUADOS DE
CORDOBA se distribuye bajo una Licencia Creative Commons
Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.

Editora responsable

Lic. Noelia García

Editores

Arch. Juan Thomas

Arch. Claudio Trucco

Arch. Florencia Moyano

Comité Asesor

Lic. Víctor Barranco García – Asociación Uruguaya de Archivólogos – Uruguay

Mgter. Candelaria de Olmos – UNC – Argentina

Dr. Manuel Salamanca López – UCM – España

Me. Eliandro dos Santos Costa – UEL – Brasil

Dra. Jaqueline Vassallo – UNC – Argentina

Comité Evaluador

Dr. Murilo Bastos da Cunha – UnB – Brasil

Mgter. Tomás Bondone – UNC – Argentina

Lic. Sofia Brunero – UNC – Argentina

Dr. Francisco A. Chacón Gómez-Monedero – Arch. Histórico de la Catedral de Cuenca – España

Mgter. Esteban Leiva – UPC - UNC – Argentina

Arch. Eliseo Gabriel Queijo Felloso – Archivo Central Contaduría General de la Nación – Uruguay

Mgter. María Laura Rosas Rossi – UdelaR – Uruguay

Dr. Eliezer Pires da Silva – UNIRIO – Brasil

Mgter. Ana Celia Navarro de Andrade – CEDIC-PUC-SP – Brasil

Dr. André Porto Ancona Lopez – UnB – Brasil

Número temático

Archivos institucionales y centros de documentación de universidades nacionales: experiencias, normativas, proyectos en marcha y desafíos político-archivísticos

Coordinadora:

Laura M. Casareto

Contenido

- 8** Presentación
- Archivos institucionales y centros de documentación de universidades nacionales: experiencias, normativas, proyectos en marcha y desafíos político-archivísticos
- Laura M. Casareto*
- 14** Breve reseña de legislaciones que afectan la gestión de documentos y archivos en el ámbito de las universidades nacionales
- Mónica G. Pené*
- 33** Aportes a la comprensión del pasado reciente de las universidades nacionales a través del Archivo de la Fuerza Aérea
- Laura Graciela Rodríguez*
- 49** Construcción colectiva del Centro de Documentación "Universidad y Dictadura" Cátedra Libre de DDHH-FFYL-UBA
- Samanta Casareto; Alba Lombardi*
- 59** Archivos, memoria, verdad y justicia: la reparación de legajos de no docentes, docentes, estudiantes y graduados de la UNLP
- Myriam Hara; Natalia Salcedo; Gerardo Bares; Lucía Gandolfi Ottavianelli; Ayelén Fiebelkorn*
- 76** Organización de las obras planas de la DGCyM de la UNLP. Necesidad del abordaje archivístico para garantizar su accesibilidad
- Ivana Farella; Mariela Amor*

Presentación:

Archivos institucionales y centros de documentación de universidades nacionales: experiencias, normativas, proyectos en marcha y desafíos político-archivísticos

Institutional archives and documentation centers of national universities: experiences, regulations, ongoing projects, political-archival problems and challenges

Laura M. Casareto*

archivohistorico@presi.unlp.edu.ar

Se ha invitado a participar de este dossier no sólo a archivistas que desarrollan su actividad en ámbitos universitarios, sino a otros profesionales –bibliotecarios, arquitectos, docentes, historiadores– que trabajan con fondos de instituciones de educación superior, y que se atreven a pensar el ámbito archivístico haciendo aportes desde su propia disciplina.

¿Cuáles son las legislaciones, las normas nacionales, las propias de cada universidad que delimitan el trabajo en los archivos universitarios? ¿Cómo visualizar la labor realizada con los legajos de detenidos-desaparecidos-asesinados, víctimas del terrorismo de Estado en las universidades, teniendo en cuenta el carácter sensible de algunos datos presentes en estos documentos? ¿Cómo describir y vincular los documentos con las investigaciones, las entrevistas, las historias de vida que a partir de ellos se producen? ¿Cuáles son y dónde están los documentos que nos hablan del pasado reciente en las universidades nacionales, testimonios del accionar represivo del terrorismo de Estado? ¿Cómo se accede a estos documentos? ¿Qué informaciones pueden aportar fondos de otras instituciones a la historia y a la memoria de las universidades argentinas?

* Técnica en Administración de documentos y archivos. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Orientación en Comunicación y Procesos Educativos (UBA). Especialista en Prácticas, Medios y Ámbitos Educativos – Comunicacionales (UNLP). Especialista en Ciencias Sociales con mención en Lectura, escritura y educación (FLACSO, Argentina). Diplomada en técnica, conservación y catalogación fotográfica de archivos de la administración pública. Directora del Archivo Histórico de la UNLP.

Profesionales, técnicos, archivistas-activistas¹ que trabajan con-en-a través de los archivos universitarios se enfrentan con estos interrogantes.

Las universidades nacionales, como instituciones públicas, deben garantizar el derecho a saber, derecho que se instituye mediante acciones políticas, derecho que debería estar en la agenda de las preocupaciones de las universidades públicas de nuestro país.

Las políticas de preservación y acceso a los archivos conllevan desafíos y responsabilidades que hay que llevar a cabo con profesionalismo, conforme a las buenas prácticas archivísticas y a la legislación nacional e internacional vigente sobre archivos y el acceso a la información pública. Sin embargo, las políticas de preservación y acceso a los archivos universitarios son, en general, políticas de no-archivo, de no-acceso, de no-valorización, de no-selección técnica de la documentación a conservar, lo que implica la destrucción arbitraria del patrimonio documental de todos nosotros. Esta política de no-archivo se ve caracterizada, entonces, “por la ausencia de una adecuada política de preservación, tratamiento y difusión del patrimonio documental. Entendiendo al Archivo por su triple función social: como fuente para la historia, para la memoria institucional y como garante de derechos, esta política de (no) archivo es uno de los grandes problemas con el que la ciudadanía en general, y los historiadores en particular, nos enfrentamos día a día para construir la memoria social, defender nuestros derechos, entender el pasado, así como proyectar el futuro” (Alves, 2013)².

En un marco general, puede considerarse que en el paso de la teoría a la práctica archivística se pone en juego un proceso complejo que trata de hacer visible el mundo de los archivos ante una sociedad que, en la mayoría de los casos, no

¹ Cuando se trata de acervos relacionados con violaciones a los derechos humanos la figura del archivista- activista es central (Nazar, 2010). Pero es importante considerar que todo archivista debe ser activista sobre todo en instituciones públicas. Esto implica, en lo político, que seamos promotores de derechos trabajando “desde el diseño y la implementación de políticas para la gestión de archivos hasta la eliminación de los obstáculos que impiden que las personas y comunidades puedan acceder a los documentos y hacer valer sus derechos (Evans et al., 2015). El archivista que lleva a cabo su tarea en la esfera pública debe saber que necesariamente su actuación tiene consecuencias políticas (Harris, 2001)” (Giraldo Lopera, 2017).

² La archivista Eugenia Alves toma esta caracterización de Roberto Pittaluga (2007) que plantea que “las políticas públicas en la Argentina han sido –y mayoritariamente siguen siendo– políticas de restricción del acceso al archivo. En el mejor de los casos, restricción a lo reunido –falta de inventarios, de catálogos, de lugares–; en el peor, destrucción de aquello que fue o pudo ser (temporalmente) archivado”.

conoce de qué se trata un archivo, ni que hay una ciencia que determina su organización y que no se realiza desde el sentido común. La debilidad de los archivos en Argentina puede observarse en varios aspectos. Como bien plantea Nazar (2012): “la ausencia de la figura del archivo administrativo en los organigramas de la Administración Pública, los bajos presupuestos, la falta de personal capacitado y adecuadamente remunerado y la común idea de que el archivo es un depósito donde se entremezclan papeles con muebles en desuso y personal castigado; el no reconocimiento por parte del Estado de la profesión; el desconocimiento de la disciplina por la sociedad civil, etc., etc.”.

La descripción archivística –que va de lo general a lo particular– debe identificar y describir el contexto de producción, el papel y la función que tiene determinada institución, la actividad que da inicio al documento, para poder no sólo encontrar el dato individual, sino reconstruir el engranaje del cual forma parte ese documento, las relaciones con el productor, entre las series y entre los documentos. Y esto hay que poder brindarlo de manera correcta a los usuarios del archivo.

Los archivos no se crean, sino que se organizan siempre respetando los principios de procedencia y de orden natural. Y no sólo se organizan, sino que se valoran, se describen, se conservan. Asimismo, a partir de las diversas investigaciones, los documentos se convierten en fuentes y generan artículos, testimonios, obras artísticas. Los legajos, los expedientes, los organigramas de nuestras universidades nacionales son documentos con inmenso valor para la historia, la memoria y la garantía de derechos.

En este marco general, integran este dossier cinco artículos basados en los trabajos y paneles de debate desarrollados durante el *II Encuentro de Archivos Universitarios* organizado por el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata del 22 al 24 de mayo del 2017³.

³ El Archivo Histórico de la UNLP participó en 2013 con una mesa de trabajo sobre archivos universitarios en el I Congreso Latinoamericano y el II Congreso Nacional de Museos Universitarios y organizó en 2015 el I Encuentro de Archivos de la UNLP. Estas reuniones científicas son antecedentes de este Encuentro que en esta oportunidad se amplió a Archivos Universitarios y tuvo la participación de las siguientes instituciones y programas: Programa Universidad y Dictadura de la Cátedra Libre de Derechos Humanos (FFYL-UBA); Programa Historia y Memoria y Archivo Histórico. Universidad UNSL; Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación- UNLP; Biblioteca Pública – UNLP; Grupo Tarea-USAM; Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires; Dirección de discapacidad – UNLP; Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable, Facultad de Arquitectura, UNLP; Instituto de Investigaciones en Humanidades y

En el primer artículo, la Mg. Mónica Pené nos invita a repasar la legislación archivística que es marco legal para los archivos de las universidades nacionales, abarcando desde la sanción de la Ley 15.930/1961 donde se establecen las funciones del Archivo General de la Nación (AGN) hasta las polémicas últimas normativas emanadas de la Secretaría de Modernización Administrativa, dependiente del Ministerio de Modernización, referidas a la despapelización del Estado, la implementación del Sistema de Gestión de Documentación Electrónica y la generación del Repositorio Único de Documentos Oficiales.

En el segundo, la Dra. Laura Graciela Rodríguez aborda la relación entre archivos e historia, haciendo aportes para los estudios de lo que se llama el pasado reciente de las universidades nacionales a través de fondos documentales de otras instituciones públicas. En este caso, trabaja específicamente sobre las Actas de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, órgano integrado por oficiales en actividad cuya función era la de estudiar la creación de nuevas leyes tras el golpe del 24 de marzo de 1976 que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón e instauró el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional⁴.

En el tercer artículo, la Mg. Samanta Casareto y la Lic. y Arch. Alba Lombardi narran el recorrido realizado por la Cátedra Libre de Derechos Humanos encargada del Programa Universidad y Dictadura que, allá por el año 2006, comenzó a realizar tareas que contribuyeron a recuperar la memoria histórica institucional de la Facultad de Filosofía y Letras en dos dimensiones: conocer las historias de los asesinados y desaparecidos de la institución, así como comprender qué proyectos fueron arrasados por la represión en este ámbito en particular y en las universidades argentinas en general.

En el cuarto artículo, escrito por la Mus. Myriam Hara, la Bib. Doc. Natalia Salcedo, el Arq. Gerardo Bares, la Prof. Ayelén Fiebelkorn y la Prof. Lucía Gandolfi Ottavianelli,

Ciencias Sociales (IdIHCS) UNLP; Universidad Nacional de Quilmes; Universidad Nacional de Córdoba; Universidad Nacional de Mar del Plata; Biblioteca de Facultad de Ciencias Económicas – UNLP; equipo del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado. Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural; Biblioteca y Archivo Históricos, Universidad del Salvador; Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano (IHAAA), Facultad de Bellas Artes, UNLP; Biblioteca INTI; Universidad Nacional del Centro; Universidad Nacional de Rosario.

⁴ Para más información se recomienda acceder a la descripción del Fondo CAL custodiado por el Departamento de Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación (Argentina): <http://atom.ipdh.mercosur.int/index.php/comision-de-asesoramiento-legislativo-cal>

se describe el proceso iniciado en la Universidad Nacional de La Plata, en el año 2015, tras la sanción de la resolución 259/15 que establece la reparación de los legajos de las víctimas del terrorismo de Estado en el ámbito de la Universidad platense. Esta resolución da inicio a varios procesos: búsqueda y reunión de los legajos de las víctimas del terrorismo de Estado en la UNLP; sanciones de las resoluciones reparatorias; conservación preventiva y, en algunos casos, interventiva de estos documentos; digitalización; entrega de copias a los familiares de las víctimas; reconstrucción de biografías de vida; cotejo de listados; desarrollos de plataformas web para mostrar el trabajo llevado a cabo, etc. De este modo, Myriam Hara, encargada del área de conservación del Archivo Histórico de la UNLP, desarrolla en este artículo el trabajo de conservación que se les realiza a estos legajos. Por su parte, el resto de los autores, equipo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, describe su labor sobre la biografías de los alumnos detenidos-desaparecidos-asesinados de dicha Unidad Académica y el software que usan para reunir esto, que podríamos llamar dossier o colección digital. Cabe aclarar que los legajos son reparados y conservados pero devueltos a su lugar original, respetando su orden de procedencia.

Para finalizar, la Arch. Ivana Farella y la Arq. Mariela Amor describen el trabajo archivístico e interdisciplinario llevado a cabo sobre los planos y expedientes (expedientes de licitaciones de obras, expedientes de obras y expedientes de obras menores entre otros) producidos por la Dirección General de Construcciones y Mantenimiento de la UNLP. En un trabajo coordinado por el Archivo Histórico de dicha Universidad, los documentos producidos por dicha Dirección están siendo valorados, clasificados, registrados y conservados para ponerlos a la consulta pública. En este artículo se cuentan las tareas llevadas a cabo al respecto.

Esperando que este dossier sea un aporte para fomentar la política archivística dentro de nuestras universidades públicas, los dejo con la lectura de mencionados artículos.

Bibliografía

Alves, E. (2013). "Las políticas de memoria en Argentina como políticas de (no) archivo. El caso de la desclasificación del 'Informe Rattenbach'". En *XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia*. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Giraldo Lopera, M. L. (2017). "Archivos, derechos humanos y memoria. Una revisión de la literatura académica internacional". En *Revista Interamericana de Bibliotecología*, vol. 40, núm. 2. Medellín: Universidad de Antioquia.

Nazar, M. (2012) "Archivos, memoria y derechos: reflexiones en torno al caso argentino" En: *COMMA, publicación periódica del Consejo Internacional de Archivos (ICA)*. Liverpool University Press.

Pittaluga, R. (2007). "Notas a la relación entre archivo e historia", en *Políticas de la Memoria, Anuario de Investigación e Información del CeDInCI*, N° 6/7. Buenos Aires.

Breve reseña de legislaciones que afectan la gestión de documentos y archivos en el ámbito de las universidades nacionales

Brief overview of legislation affecting the records and archives management in the national universities area

Recibido: 30/06/2017 – Aceptado: 10/07/2017

Mónica G. Pené*

monica.mails@gmail.com

Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo proporcionar una breve reseña de las principales normativas emanadas a nivel nacional y provincial que tienen relación directa o indirecta con la gestión de documentos y archivos del sector público, desde una perspectiva que contemple la influencia de dichas normativas en el contexto de la gestión documental en el ámbito universitario argentino. En primer lugar, se plantea un estado de situación de la legislación archivística en Argentina. Luego se enumeran las legislaciones nacionales y provinciales más relevantes en materia archivística y en relación con el acceso a la información pública. Finalmente, se mencionan otras normas de interés que afectan la gestión de documentos en las universidades nacionales.

Palabras clave: Legislación - Archivos - Universidades - Archivos universitarios - Argentina

Abstract: This paper aims to provide a brief overview of the main regulations emanating from national and provincial government levels that have direct or indirect relationship with the records and archives management of the public area, from a perspective that contemplates the influence of these regulations in the context of the record management in the Argentinean universities area. In first place we present the situation of the archival legislation in Argentina. In second place, we list the most relevant national and provincial legislations on archives, in reference to public information access. Finally, we mention other rules and policies of interest that affect the records management in national universities.

Keywords: Legislation - Archives - Universities - University archives - Argentina

* Licenciada en Bibliotecología y Documentación por la Universidad Nacional de La Plata (2001). Magister en Archivística por la Universidad Carlos III de Madrid (2005). Responsable del Departamento Gestión de Colecciones en la Biblioteca Prof. Guillermo Obiols de la Facultad de Humanidades de la UNLP. Profesora Adjunta en la Cátedra Gestión de Colecciones en la carrera de Bibliotecología de la UNLP.

1. Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo ofrecer una breve reseña de las normativas emanadas tanto a nivel nacional como provincial en relación a la gestión de documentos y archivos en el ámbito del Sector Público, valorando su utilidad y posible impacto en el contexto de la gestión documental que tiene lugar en las universidades nacionales argentinas (UUNN).

Si bien sabemos que las universidades públicas en Argentina gozan de un carácter autónomo y autárquico, el hecho de que las mismas sean financiadas con fondos públicos provenientes del Estado Nacional las obliga a contemplar ciertas normativas emanadas para el funcionamiento de la Administración Pública Nacional. Y en materia de gestión documental la situación no es diferente. De ahí nuestro interés en indagar sobre la legislación archivística argentina desde la perspectiva de los archivos universitarios.

Hemos organizado el trabajo iniciando la exposición con un estado del arte de la legislación archivística en Argentina, para luego enumerar las legislaciones nacionales y provinciales más relevantes en materia archivística y en referencia al acceso a la información pública. Finalmente, se mencionan otras normas de interés que afectan la gestión de documentos en las universidades nacionales.

Sin pretensión de completitud, esperamos que este trabajo sea de utilidad para la comunidad de archivistas universitaria, sirviendo como guía inicial para introducirse en la legislación archivística nacional y su efecto directo sobre la gestión documental en el ámbito de las universidades públicas.

2. Estado del arte de la legislación archivística en Argentina

La problemática de la legislación archivística en Argentina ha sido en las últimas décadas un tema en constante debate, tal como dejan de manifiesto diversos trabajos publicados (Brunero y Díaz Mariano, 2013; Szlejcher, 2009; Vázquez Murillo, 2006; Tanodi, Rapela y Vasallo, 2005; Mendoza Navarro, 2002; Jaen García, 2001) y numerosos eventos de la especialidad en cuyo temario figuran las normativas como una cuestión a abordar (el Congreso Argentino de Archivística, el Congreso de Archivología del Mercosur, el Seminario de Legislación Archivística, por mencionar algunos).

Según Brunero y Díaz Mariano (2013), el patrimonio documental de Argentina se encuentra jurídicamente desprotegido. Por un lado, debido a la falta de precisión en

la legislación vigente. Por otro lado, como consecuencia de la escasa comunicación entre instituciones archivísticas que comparten jurisdicción y forman parte de un mismo ciclo documental.

Vázquez Murillo (2006), por su parte, nos dice que en Argentina falta mucho por hacer en materia de legislación relativa a los archivos y a la gestión documental en el ámbito de lo público. Resalta el carácter fragmentario y disperso de la normativa (demasiadas ideas desordenadas), la ausencia de una norma unificadora, la falta de unidad en políticas específicas, la precariedad de medios financieros y presupuestos dedicados a la conservación, por mencionar sólo algunas de las principales falencias. Además, señala cierta preocupación por los bienes del patrimonio cultural arquitectónico o monumental, aunque una escasa atención al patrimonio bibliográfico y documental a proteger oficialmente. Esto queda de manifiesto en la inexistencia de una ley nacional sobre archivos públicos, con los instrumentos que son necesarios en el mundo actual.

Han pasado 6 décadas desde la sanción de la Ley 15.930/1961 donde se establecen las funciones del Archivo General de la Nación (AGN), que sigue sin reglamentarse. Y las normativas que le han seguido no van más allá de la teoría y de las enunciaciones de valores meramente simbólicos, mientras que su puesta en marcha se ve mutilada por trabas burocráticas y la falta de voluntad política para avanzar en esta agenda (Torres, 2014).

Mientras el mundo reconoce la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico específico, Argentina no termina de atender la necesidad de adecuarse a las expectativas internacionales en este campo, tanto para los soportes tradicionales como para los electrónicos. Como señala Torres (2014), es imprescindible trabajar en el armado de una base legal que respalde las acciones por desarrollar y permita a los archivos estatales una amplia presencia en el ámbito nacional, para garantizar una óptima utilización de los recursos y fomentar una concientización de la importancia de los archivos en nuestras sociedades.

3. Legislación nacional relacionada con la gestión documental y los archivos

Si bien las universidades nacionales (UUNN) son entidades autónomas, responden a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Esta relación con la Administración Pública Nacional exige que las UUNN conozcan y apliquen, en numerosos casos, un conjunto de normativas emanadas a nivel nacional. En referencia a la gestión documental, también pueden encontrarse

normativas específicas que de una manera u otra afectan o pueden afectar la gestión de documentos y archivos en el ámbito universitario. Veamos a continuación algunas de ellas.

La **Ley 15.930**, publicada en el B.O. del 23/11/1961, determina las funciones del *Archivo General de la Nación* (AGN), cuya finalidad es reunir, ordenar y conservar la documentación que la ley le confía, para difundir el conocimiento de las fuentes de la historia argentina. Entre sus funciones, mencionadas en el Art. 2º, destacamos el mantener y organizar la documentación pública perteneciente al Estado nacional, que integre el patrimonio del archivo, o la documentación privada que le fuera entregada para su custodia; inventariar, catalogar y divulgar los documentos que están bajo su custodia; así como obtener copias de documentos conservados en archivos oficiales de las provincias o del extranjero, siempre que interesen para el estudio de la historia nacional. Mediante esta ley también se crea la Comisión Nacional de Archivos (Art. 10º), que apoya al AGN en tareas relacionadas al mantenimiento y conservación del acervo documental-histórico de la Nación y de las provincias.

Asimismo, en el Art. 16º se brinda una definición del término “documentos históricos”, incluyendo en esta categoría los de cualquier naturaleza relacionados con asuntos públicos expedidos por autoridades civiles, militares o eclesiásticas, ya sean firmados o no, originales, borradores o copias, como así también sellos, libros y registros y, en general, todos los que hayan pertenecido a oficinas públicas o auxiliares del Estado y tengan una antigüedad no menor de treinta (30) años; los mapas, planos, cartas geográficas y marítimas con antigüedad de, por lo menos, cincuenta (50) años; las cartas privadas, diarios, memorias, autobiografías, comunicaciones y otros actos particulares y utilizables para el conocimiento de la historia patria; los dibujos, pinturas y fotografías referentes a aspectos o personalidades del país; los impresos cuya conservación sea indispensable para el conocimiento de la historia argentina, y los de procedencia extranjera relacionados con la Argentina o hechos de su historia, similares a los enumerados anteriormente.

Llama la atención que esta ley aún no haya sido reglamentada. No obstante, existen otras normativas que la afectan de manera específica: Decreto 232/1979, establecimiento de pautas para la conservación de los archivos; Decreto 1571/1981, determinación de plazos de guarda de la documentación de la Administración Pública Nacional; Decreto 232/1992, apertura de documentación vinculada al nazismo; Decreto 1290/1993, creación de la Comisión Nacional Asesora de Archivo; Decreto 209/1999, creación del Sistema Nacional de Museos y Archivos

Presidenciales; Resolución 41/1999, intervención del AGN; Resolución 1128/2001, traslado de expedientes jubilatorios al AGN; Decisión administrativa 5/2002, cese del depósito de documentación por parte del Ministerio de Justicia y traslado al AGN; Decreto 503/2015, desclasificación de documentos sobre el Conflicto Bélico del Atlántico Sur; Decreto 1131/2016, archivo y digitalización de expedientes; entre otras normas.

En el caso particular de las UUNN, es importante tomar conocimiento de esta ley y de la existencia del AGN, ya que a nivel nacional representa una institución cultural de larga trayectoria y reconocida experiencia en temas archivísticos de la cual nutrirse.

Otra normativa interesante es el Decreto 232/1979, publicado en el B.O. del 5/02/1979. Manifiesta la necesidad de poner orden y coordinar todo lo referente a la situación de los archivos de la Administración Pública Nacional. Para ello establece, en su Art. 1º, que los ministerios y secretarías de Estado deberán someter a consideración de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación todo proyecto de medidas sobre sus respectivos archivos, vinculadas a la *eliminación, conservación, microfilmación y traslados*. Por varias décadas, esta norma se vio complementada por el Decreto 1571/1981, que establece plazos de guarda para la documentación pública. Actualmente está derogada por el Art. 9º del Decreto 1131/2016.

Dado que varios de los documentos generados en las UUNN surgen a partir de funciones similares a las realizadas en la Administración Pública Nacional, su gestión y guarda pueden presentar también similitudes. Así, el Decreto 1571/1981, publicado en el B.O. del 20/10/1981, que aprueba la *tabla de plazos mínimos de conservación de los documentos de personal y de control*, de aplicación obligatoria en todo el Sector Público Nacional, es tomado como modelo por las universidades para el establecimiento de sus propios plazos de guarda. A modo de ejemplo, incluimos a continuación algunos tipos documentales y su plazo de guarda mencionados en el decreto estudiado.

Categoría	Tema	Plazo de conservación
	Accidente de trabajo con causa judicial	1 año desde la finalización de la causa judicial por perención de instancia o por sentencia final

Documentos de personal	Asignación de funciones	1 año desde la finalización de las funciones asignadas
	Cesantías	Permanente
	Justificación de inasistencias	1 año desde la fecha de justificación
	Legajos de personal	Permanente
	Renuncias	1 año desde su aceptación
Documentos de control	Comprobantes de correspondencia certificada	6 meses desde su fecha
	Fichas de trámite de expediente o actuación	Permanente
	Planillas de control de remitos de documentos	1 año desde la última fecha incluida en la planilla
	Remitos de documentos	2 años desde la fecha del remito

Tabla 1 - Plazos de conservación de documentos de la Administración Pública Nacional (derogados)

Asimismo este decreto incluye, como anexos, modelos e instructivos del "Inventario de solicitud de desafectación" y del "Acta de eliminación". Cabe señalar que esta normativa ha sido derogada por el Art. 9º del Decreto 1131/2016, en el cual no se establecen nuevos plazos de conservación de los documentos del Sector Público Nacional, hecho que se subsana recién con la Resolución E44/2016.

Por otro lado, debemos mencionar el Decreto 232/1992, publicado en el B.O. del 5/02/1992, que deja sin efecto toda reserva por "razones de Estado" de *información relacionada con el accionar de criminales nazis* (Art. 1º), y establece que todos los archivos que contengan esa información deberán ser puestos a disposición del AGN (Art. 2º). La normativa en cuestión se ha visto complementada por otras, tales como: Decreto 1290/1993, creación de la Comisión Nacional Asesora de Archivos; Decreto 390/1997, creación de la Comisión para el esclarecimiento de las actividades del

Nazismo en la República Argentina; Resolución 25/2003, Investigación sobre destrucción de documentación sobre el nazismo.

También debemos mencionar la Ley 25.119 y su Decreto Reglamentario 1209/2010. Publicada en el B.O. del 24/09/1999, esta ley crea la *Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional* (CINAIN), como un ente autárquico y autónomo que actúa dentro de la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación. Asimismo, establece sus competencias, estructura y recursos. Dentro de sus funciones principales está el reunir, registrar, preservar y difundir el patrimonio filmico nacional. En el Art. 1º del Decreto 1209, publicado en el B.O. 31/08/2010, define el término "acervo audiovisual", refiriéndose a los registros filmicos, en video o en otros soportes creados o por crearse, que contengan imágenes en movimiento o con sensación de movimiento, mudas o sonoras, realizadas, difundidas o existentes en el país; así como los objetos materiales y elementos inmateriales directamente relacionados con los medios y soportes de las imágenes descriptas anteriormente y necesarios para su conservación, exhibición o restauración. Esta normativa se ha visto recientemente complementada por la Resolución 7/2017 mediante la cual se procede a conformar el Consejo Asesor de la CINAIN.

Por su parte, la Ley 25.197, publicada en el B.O. del 15/12/1999, plantea la centralización de datos sobre los bienes culturales de la Nación, en el marco de un sistema de protección colectiva de su patrimonio, a partir de la identificación y registro del mismo en el *Registro Nacional de Bienes Culturales* (Art. 1º). En su Art. 2º define los "bienes culturales" como aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el testimonio de la creación humana y la evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional. En este contexto lista los bienes de interés artístico, entre los que se encuentran los documentos de archivos, incluidos colecciones de textos, mapas y otros materiales, cartografías, fotografías, películas cinematográficas, videos, grabaciones sonoras y análogos.

Teniendo en cuenta que varios presidentes argentinos obtuvieron sus titulaciones en UUNN, consideramos también de interés el Decreto 209/1999, publicado en el B.O. el día 17/03/1999. En el mismo se establece la creación del *Sistema Nacional de Museos y Archivos Presidenciales* (Art. 1º), su administración general, funciones y estructura organizativa. Como funciones se mencionan la reunión, conservación y exhibición de documentos, objetos y materiales que constituyan referentes de los presidentes a partir de 1983 (Art. 5º).

Publicada en el B.O. del 07/07/2003, la Ley 25.750 determina en su Art. 1º que la política del Estado nacional preservará especialmente el *patrimonio* antropológico, histórico, artístico y cultural. Considerando que los documentos de archivo constituyen parte del patrimonio histórico-artístico, corresponde mencionar aquí la presente ley, más allá de que lo más importante de su texto sea el explicitación del rol del Estado en relación a la conservación de dicho patrimonio.

El Decreto 1259/2003, publicado en el B.O. del día 17/12/2003, establece en su Art. 1º la creación del *Archivo Nacional de la Memoria* como organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. Entre otras cuestiones, indica como funciones del archivo el reunir, analizar, clasificar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones. Por Decreto 1852/2007 sufre modificaciones en su articulado, referidos principalmente a la presidencia del archivo.

Considerando que varias de las UUNN poseen colegios de pre-grado con sus correspondientes bibliotecas y archivos, deberemos tener en cuenta también la Ley 26.917, publicada en el B.O. del día 14/01/2014. A través de la misma se crea el *Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativas* (Art. 1º), cuya finalidad será generar acciones para la integración de las unidades de información en redes gestionadas adecuadamente en un marco de trabajo cooperativo, para garantizar a los actores de la comunidad educativa la igualdad de oportunidades y posibilidades de acceso a la información y a la producción de conocimiento, en consenso con las políticas educativas jurisdiccionales (Art. 4º). Rescatamos de esta normativa la mención de los archivos escolares (Art. 8º), ya que se establecen las condiciones para su funcionamiento adecuado, conforme a la modalidad, el nivel, la matrícula y la cantidad de secciones del establecimiento escolar al que sirven.

Publicado en el B.O. del 31/10/2016, el Decreto 1131/2016 trata sobre *el archivo y la digitalización de expedientes* en el ámbito de la Administración Pública Nacional. Por un lado determina, en su Art. 1º, que los documentos generados y/o reproducidos en soporte electrónico según las pautas fijadas por el Ministerio de Modernización son considerados originales y tienen idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel. Ante esta consideración, explicita que los documentos en papel digitalizados podrán destruirse según decisión de autoridad competente (Art. 2º). Por otro lado, en el Art. 4º, se faculta a la Secretaría de

Modernización Administrativa a dictar normas relativas a la conservación y plazos de guarda de los documentos en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), así como para el proceso de digitalización, archivo y conservación de documentos de gestión en soporte papel en el ámbito del Sector Público Nacional. Asimismo, en su Art. 3º se aprueba el Repositorio Único de Documentos Oficiales, con la función de centralizar, contener y conservar la totalidad de documentos electrónicos obrantes en dicho sistema, asegurando su integridad, accesibilidad y disponibilidad. Cabe destacar el Art. 7º, en el cual se dice que el AGN definirá los documentos digitalizados que deberán conservarse en soporte original debido a su valor histórico. Esta normativa deroga el Decreto 232/1979 (pautas de conservación) y el Decreto 1571/1981 (plazos de guarda).

Considerando que esta normativa surge en el marco del plan de modernización del Estado Nacional, que poco a poco va sumando cada vez más dependencias que se rigen por las nuevas pautas, será necesario que las universidades presten atención a dichas normas a partir de sus diferentes relaciones con las demás reparticiones estatales.

Finalmente hemos de mencionar la Resolución E 44/2017. En el Art. 1º de esta normativa, publicada en el B.O. del 2/01/2017, se aprueba la *tabla de plazos mínimos de conservación y guarda de actuaciones administrativas*, tanto en soporte papel como electrónico. La tabla anterior estaba incluida en el Decreto 1571/1981, derogada por el Decreto 1131/2016. A modo de ejemplo, se incluyen a continuación algunos tipos documentales y su plazo de guarda.

Categoría	Tema	Plazo de conservación
Recursos humanos	Cese de servicios - Renuncia	1 año desde su aceptación
	Licencia ordinaria	1 año desde que fue concedida
	Reclamo agente	5 años desde su resolución
Acto administrativo	Proyecto de Ley	5 años desde la remisión al Congreso
Fondos	Solicitud de viáticos y pasajes internacionales	10 años desde la fecha de su solicitud

	Caja Chica - Rendición	10 años desde la fecha de la rendición
Compras y contrataciones	Licitación pública	10 años desde la fecha de emisión de la última orden de pago
	Contratación directa	5 años desde la orden de pago
Convenios	Convenios Institucionales con Órganos Locales.	10 años
Acceso a la información	Denuncia por incumplimiento de acceso a la información pública	5 años

Tabla 2 - Plazos de conservación de documentos de la Administración
Pública Nacional (vigentes)

Asimismo, en el Art. 2º se aprueba el “Procedimiento de Guarda Temporal, Archivo y Recuperación de Expedientes Electrónicos” a partir del uso del Sistema de Gestión Documental Electrónica. En el Art. 5º se aprueba el “Proceso de digitalización”, brindando pautas mínimas sobre el mismo. Cabe aclarar aquí que dichas pautas parecen haber sido pensadas para documentos en general, sin contemplar aquellos que pueden ser de guarda permanente, para los cuales los parámetros indicados resultan insuficientes y no se corresponden con los estándares internacionales recomendados por instituciones que se dedican a la digitalización del patrimonio documental.

Respecto de los artículos 8º y 9º, hemos de decir que generaron preocupación en la comunidad de historiadores y archivistas porque tal como se presenta su redacción dan lugar a la depuración de documentos administrativos cuyos plazos de guarda hayan vencido, bastando solamente para ello la autorización por parte de un funcionario con rango no inferior a Director General o Nacional perteneciente al organismo o jurisdicción donde se hubiera archivado el expediente. Esto deja en manos de un único individuo la decisión de la guarda de aquellos documentos que deberían conformar el patrimonio documental de la Nación, además de que va en contra de normas de mayor jerarquía donde se especifica el rol del AGN en este sentido. Como consecuencia de los petitorios y reclamos sociales, los artículos mencionados fueron derogados mediante Resolución 32/2017, donde se agrega,

además, que el funcionario autorizante deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 1131/2016, que establece que el AGN definirá los documentos o expedientes digitalizados que deberán conservarse en soporte original debido a su valor histórico. No obstante, no se aclara demasiado cómo se llevará adelante esa definición por parte del AGN.

4. Legislación provincial relacionada con la gestión documental y los archivos

Por su carácter nacional, no existen normativas a nivel provincial que rijan sobre el funcionamiento de las universidades nacionales. Sin embargo, hay algunas normas que conviene conocer por diversas razones.

Una de ellas tiene que ver con la existencia, en la provincia, de un *archivo histórico provincial*, entidad relevante con la cual la universidad puede establecer vínculos y compartir ricas experiencias en materia de gestión documental. Ponemos por ejemplo, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, el Decreto 655/1925 que establece la creación del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (AHPBA) con la intención de centralizar los fondos documentales provenientes de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia y la Dirección General de Escuelas. En normativas posteriores podemos observar pautas de funcionamiento del servicio: Decreto-Ley 21040/1957 (asesoramiento Archivos Municipales), Decreto 5532/1969 (reglamenta actividades), Decreto 883/1996 (expurgo y conservación).

Otra normativa de interés es la que establece el *régimen general de archivo y plazos de guarda para las actuaciones que se tramitan en la Administración Pública Provincial*. Si bien esta normativa debe estar en consonancia con la emanada a nivel nacional, puede servir de ejemplo para que las universidades elaboren sus propios regímenes en materia de archivos. Como ejemplo mencionamos el Decreto 3066/1991, que determina el régimen general de archivo para las actuaciones que se tramitan en la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, fijando además los plazos de guarda de la documentación. Véase a continuación un fragmento de la tabla de plazos.

Plazo	Actuaciones generales	Ministerio de Economía	Ministerio de Salud	Dir. Gral. de Escuelas y Cultura
	- Solicitudes de	- Comunicación	- Internación de	- Aprobación de

1 año	informes judiciales - Oficios del Poder Judicial	venta automotor - Certificados de trabajo	enfermos - Instalación de servicio público	calendarios escolares y actividades - Autorización de suspensiones de clases
3 años	- Investigaciones presumariales - Colaboración en exposiciones	- Carátulas y duplicados de certificados de dominio - Solicitudes de anotación marginal	- Estadísticas vitales (nacimientos, defunciones, defunciones fetales y matrimonios)	- Creación de escuelas - Designación de inspectores de distrito, secretarios y jefes de filiales
5 años	- Adquisición de inmuebles - Incompatibilidades	- Comunica robo de automotor - Préstamos a Municipalidades	- Habilitación de establecimientos de asistencia médica	- Reclamos de puntaje y clasificación docente

Tabla 3 - Plazos de conservación de documentos en la Administración Pública Provincial

(Buenos Aires)

25

Por último, cabe señalar una normativa que no debiera desconocerse, la que da origen al *Sistema de Archivos Públicos en cada Provincia*. Corresponde mencionar aquí que varias provincias argentinas ya cuentan con una legislación de este tipo, como es el caso de: San Juan (Ley 5307/1984), Chaco (Ley 3123/1985), Neuquén (Ley 1732/1987), Santa Fe (Ley 10870/1992), Salta (Ley 7092/2000) y Tierra del Fuego (Ley 714/2006). Llama la atención que provincias como Córdoba -con amplia trayectoria archivística- o Buenos Aires -por sus dimensiones e implicancias políticas- no cuenten aún con una normativa de este tipo, a pesar de las propuestas elaboradas por la comunidad de archiveros y entidades del ámbito, presentadas ante diputados provinciales en diversas ocasiones.

5. Legislación en materia de acceso a la información y documentación pública

Un aspecto estrechamente vinculado a la gestión de documentos y archivos, ya sea en el contexto universitario o en las administraciones públicas nacional y provincial, es el acceso a dicha documentación por parte de interesados, con el objetivo de

promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Es un derecho que nace de la propia Constitución Argentina.

El acceso a la información se encuentra regulado a nivel nacional por diversas normativas. Una de ellas es el Decreto 1172/2003, publicado en el B.O. del 4/12/2003, que regula el *acceso a la información pública en el Sector de la Administración Pública Nacional*, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento. Tal como se indica en el Anexo VII, titulado “Reglamento general del acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo Nacional”, se busca permitir y promover una efectiva participación ciudadana a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz (Art. 4º) a toda persona física o jurídica, pública o privada, que lo solicite, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado (Art. 6º). Su ámbito de aplicación son los organismos, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, así como las organizaciones privadas que hayan recibido subsidios del sector público nacional, o instituciones cuya administración esté a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones y a empresas privadas a quienes se les hayan otorgado la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público (Art. 2º). Cabe señalar que esta normativa ha sido modificada recientemente por el **Decreto 79/2017** (a raíz de lo establecido en la Ley 27.275) donde, por un lado, se han sustituido numerosos artículos aclarando aspectos incluidos en el Decreto 1172 y, por otro lado, se han agregado otros relacionados a los responsables del acceso a la información.

Otra normativa a destacar es la Ley 27.275 y su Decreto Reglamentario 206/2017. Publicada en el B.O. el día 29/09/2016, esta ley busca garantizar el ejercicio del *derecho de acceso a la información pública*, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública (Art. 1º), mediante la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información (Art. 2º) bajo custodia de los sujetos obligados por la presente ley. En su Art. 3º define como “información pública” a aquella generada, obtenida, transformada, controlada o custodiada por los sujetos obligados alcanzados por esta ley (Art. 7º), entre los que podemos mencionar a los siguientes: Administración Pública Nacional, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Consejo de la Magistratura, empresas y sociedades del Estado, Banco Central, organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos, personas jurídicas públicas no estatales en aquello que

estuviese regulado por el derecho público, entre otros. Mediante el Art. 19º, se crea la Agencia de Acceso a la Información Pública para velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la presente ley, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover medidas de transparencia activa. En el Reglamento, publicado en el B.O. el 28/03/2017, se especifican los pasos a seguir y los plazos a considerar para solicitar acceso a este tipo de información, aunque contiene todavía numerosos artículos sin reglamentar.

A nivel provincial, existen leyes y decretos en varias provincias argentinas que, basadas en la legislación nacional, también regulan el acceso a la información pública. Ponemos por caso la Ley 12.475 de la Provincia de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario 2549/2004. Publicada en el B.O. 29/08/2000, la ley establece pautas generales para el *acceso a los documentos de la Administración Pública Provincial*, tomando como base lo planteado en el Decreto Nacional 1172/2003. Podemos encontrar mayor detalle en el Decreto Reglamentario, publicado en el B.O. del 18/10/2004, que aprueba el "Reglamento General de Acceso a Documentos Administrativos para el Poder Ejecutivo", incluido en Anexo, donde se especifican los pasos a seguir para solicitar acceso a este tipo de información en el contexto de la provincia de Buenos Aires.

6. Reflexiones en torno a la legislación sobre la modernización del Estado

Mucho se ha hablado últimamente de la legislación vinculada a la despapelización de la Administración Pública, tanto a nivel nacional como provincial. En este sentido, es conveniente tener presentes algunas normativas que desde hace varios años vienen señalando una dirección por parte de la Administración Estatal encaminada a la informatización y digitalización de trámites y documentos que se generan y reciben en las diversas dependencias del Sector Público.

Este camino hacia la despapelización no es reciente, como bien puede observarse en la Ley Nacional 18.569, publicada en el B.O. el 11/02/1970, y en su Decreto Reglamentario 385/1970, publicado en el B.O. el 28/01/1970, cuyo tópico resulta ser la *microfilmación de documentos*. Mediante estas normas se otorga valor legal y probatorio al microfilme, con los mismos alcances que sus originales, y se establecen pautas y controles para garantizar la validez de los microfilmes.

Otra normativa relacionada con la despapelización es la Ley Nacional 25.506, publicada en el B.O. el día 14/12/2001, y su Decreto Reglamentario 2628/2002, publicado el 20/12/2002, que se ocupan de la *firma digital*. Reconoce el empleo de

la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica. Asimismo establece objeto y requerimiento de firma, requisitos para su validez, define los certificados digitales y el certificador licenciado, menciona los derechos del titular de un certificado digital, quién es la autoridad de aplicación, el sistema de auditoría, la Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital, y lo que atañe a responsabilidades y sanciones.

También hemos de mencionar el Decreto Nacional 103/2001, publicado en el B.O. el 29/01/2001, actualmente derogado por el Decreto 434/2016, mediante el cual se aprueba el *Plan Nacional de Modernización*, cuyos ejes de acción son el cambio del modelo de Gestión, los proyectos de modernización estructural, la transparencia y la política anticorrupción.

Años más tarde, por Decreto Nacional 378/2005, publicado en el B.O. el 28/04/2005, se aprueba el *Plan Nacional de Gobierno Electrónico* y los lineamientos estratégicos para la puesta en marcha del Plan, señalando además organismos comprendidos de la Administración Pública Nacional, objetivos, instrumentos y autoridad de aplicación. Poco después la norma se ha visto complementada por otras dos: Resolución 163/2010, estándares tecnológicos para la Administración Pública en línea; Disposición 3/2013, política de seguridad de la información.

Ya en el Decreto Nacional 512/2009, publicado en el B.O. el 12/05/2009, se introduce el concepto de "*Agenda digital argentina*". Se impulsa la conformación de un Gabinete Multisectorial orientado al aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Asimismo, se autodefine como el plan nacional para la inclusión y apropiación por parte del gobierno, las instituciones y las personas de los beneficios de la Sociedad del Conocimiento mediante el uso intensivo y estratégico de las TIC.

Recientemente, por Decreto Nacional 434/2016, publicado en el B.O. el 2/03/2016, se aprueba el "*Plan de Modernización del Estado Nacional*", cuyo objetivo general es alcanzar un Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios. Además de establecer los ámbitos de aplicación, determina las atribuciones del Ministerio de Modernización. Asimismo, deroga el Decreto 103/2001.

Vinculado a la despapelización está el empleo de un *sistema de gestión documental electrónica*. En este sentido, el Decreto Nacional 561/2016, publicado en el B.O. el 7/04/2016, aprueba la implementación del sistema GDE como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de las

actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional. Además, faculta a la Secretaría de Modernización Administrativa a dictar normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la implementación y funcionamiento del sistema.

Otra normativa relevante es la Resolución E22/2016, publicada en el B.O. el día 14/10/2016, donde se aprueba la implementación del módulo Legajo Único Electrónico (LUE) del sistema de GDE, como único medio de creación, registro, guarda y archivo de la totalidad de la documentación y datos correspondientes a las personas que prestan servicios en la Administración Pública Nacional desde el momento de su ingreso.

7. Otras normas de interés

Existen otras normativas que, si bien no tienen una relación directa con la gestión documental y los archivos, exigen del archivista un compromiso específico y una responsabilidad asumida para con la institución en la que se desempeña así como también para con los miembros que la integran, sin importar si se trata de la Administración Pública Nacional o Provincial y sus ciudadanos, o bien una Universidad Nacional y su comunidad académica.

Una de esas normativas es la Ley Nacional 24.766, publicada en el B.O. del 30/12/1996. Trata sobre la *confidencialidad* de la información y los productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos. Según consta en su Art. 3º, toda persona que con motivo de su trabajo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información secreta y sobre cuya confidencialidad se la haya prevenido, deberá abstenerse de usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que guarda dicha información o de su usuario autorizado.

Siguiendo la misma línea de pensamiento, incluimos aquí la Ley Nacional 25.188 y su Decreto Reglamentario 164/1999, que se ocupan de la *ética en el ejercicio de la función pública*. La ley, publicada en el B.O. del día 1/11/1999, establece los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado (Art. 1º y 2º). Asimismo, establece la presentación de la

declaración jurada patrimonial por parte de los funcionarios públicos (Art. 4º a 11º), el régimen de obsequios a funcionarios públicos (Art. 18º) y el régimen de incompatibilidades (Art. 13º a 17º). En el Art. 14º del Decreto 164, publicado en el B.O. del 7/01/2000, se aclara que el plazo de guarda de la declaración jurada patrimonial integral será de 10 años contados a partir de la fecha de cese del funcionario o por el plazo que impongan las actuaciones administrativas o judiciales que lo involucren.

Por su parte, la Ley Nacional 25.326, publicada en el B.O. el 2/11/2000, y su Decreto Reglamentario 1558/2001, publicado el 3/12/2001, también resultan de interés para el archivista universitario, ya que tratan sobre el "Habeas Data" o la *protección de datos personales*. La ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero, de la Constitución Nacional (Art. 1º). Asimismo, establece los principios generales relativos a la protección de datos personales (consentimiento, confidencialidad, transferencia) (Arts. 3º a 12º), los derechos de los titulares de datos (Arts. 13º a 20º) y los deberes de los archivos y bancos de datos (Arts. 21º a 28º), entre otros asuntos.

8. Normativas sobre gestión documental en el contexto de las Universidades Nacionales

Cada UUNN elaborará las normas que le correspondan en materia de gestión documental. Ahora bien, no debemos olvidar que la primera norma relevante en el contexto universitario es el *estatuto de la universidad*, en el cual sería deseable la mención del archivo como una dependencia que favorezca la transparencia y el control de la gestión, así como la referencia al patrimonio documental de la institución.

Otra norma de interés es la que reglamenta los *procedimientos administrativos* al interior de la universidad, donde se detallen las facultades y derechos principales de los órganos competentes, la forma de iniciar, impulsar o concluir trámites, formalidades relativas a los escritos y documentos, pautas para la compaginación y foliatura de los expedientes, así como también para su desglose o reconstrucción, criterios para la publicidad de los actos de la universidad, entre otros asuntos.

Por otra parte, si existiera, sería de suma utilidad contar con una normativa que estableciera los *plazos mínimos de conservación de expedientes y documentos* en el ámbito de la universidad.

9. Palabras finales

Hasta aquí hemos presentado una somera enumeración de diversas normativas que resultan de interés para la gestión de documentos y archivos en el ámbito de las universidades nacionales argentinas.

Consideramos que el archivo universitario es un servicio indispensable para la Universidad, porque recoge, organiza, gestiona, conserva y difunde su patrimonio documental con miras a servir de salvaguarda de derechos en la gestión administrativa, y con el objeto de facilitar su acceso y consulta por parte de la comunidad universitaria en particular y por los ciudadanos en general, de acuerdo con la legislación vigente, contribuyendo a la racionalización y calidad del sistema archivístico universitario, tal como señala la Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas.

Si bien los archivos universitarios no constituyen estrictamente archivos oficiales, la relación de las UUNN con la Administración Pública Nacional es indiscutible, lo que nos permite plantear, en palabras de Torres (2014), que los archivos oficiales son una gigantesca fuente de información que alberga la evidencia de las actividades que se han realizado y las que no se realizaron, documentando y verificando si los recursos de un país están siendo utilizados de manera adecuada, brindando además la prueba para juzgar a quienes no cumplan con sus obligaciones. Lo cierto es que para que los archivos públicos puedan cumplir estas funciones es necesario que estén organizados y disponibles para su uso, y para ello se requiere, entre otras cosas, de una legislación archivística que garantice su correcto desempeño.

Bibliografía

Argentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. InfoLEG: Información legislativa y documental. <http://www.infoleg.gob.ar/>

Brunero S.Y. y Díaz Mariano M. (2013). Un Sistema Nacional de Archivos para la República Argentina: Estudio de legislación comparada. *Síntesis*, 4, 1-11. ISSN 1851-8060.

Recuperado de:
<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/sintesis/article/view/12209/12534>

Jaen García L.F. (2001). La legislación archivística en América Latina. *Diálogos: Revista Electrónica de Historia*, 2(3). Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43920302>

Mendoza navarro A. L. (2002). *Legislación archivística: Lo que el archivero debe conocer*. Lima: Perú Textos.

Szlejcher A. (2009). Gestión de documentos: Necesidad de una política pública. En *V Congreso Argentino de Administración Pública*. San Juan: Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública.

Tanodi B., Rapela M. y Vasallo J. (2005). *Patrimonio documental y bibliográfico: Regulación jurídica en la Argentina*. Córdoba: Archivo General e Histórico, Universidad Nacional de Córdoba.

Torres N., comp. (2014). *Hacia una política integral de gestión de la información pública: Todo lo que siempre quisimos saber sobre archivos (y nunca nos animamos a preguntarle al acceso a la información)*. Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Vázquez Murillo M. (2006). *Administración de documentos y archivos: Planteos para el siglo XXI*. Buenos Aires: Alfagrama.

Aportes a la comprensión del pasado reciente de las universidades nacionales a través del Archivo de la Fuerza Aérea

Contributions to the understanding of the recent past of the national universities through the Air Force Archive

Recibido: 30/06/2017 – Aceptado: 09/07/2017

Laura Graciela Rodríguez*

lau.g.rodrig@gmail.com

Resumen: En la actualidad contamos con un conjunto muy valioso de fondos documentales vinculado a los llamados “Archivos de la represión y la memoria”, que nos han permitido ampliar sustancialmente nuestra comprensión del pasado reciente. En este artículo presentaremos una descripción del fondo documental que se encuentra digitalizado en el sitio de la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea. Si bien dicho acervo ofrece numerosa información sobre la política de la última dictadura, contiene un conjunto de 27 documentos acerca de la universidad durante esa etapa. Lo relevante en este caso es que los documentos disponibles no se refieren a una casa de estudio en particular, sino que nos brindan un panorama amplio de la vida universitaria a partir de los distintos actores como ministros, rectores, militares, agentes de inteligencia y estudiantes, provenientes de diferentes carreras, facultades y universidades.

Palabras clave: universidad – dictadura – archivo – documentos – digitalización

Abstract: In this time, we have a very valuable group of historical documents which formed part of the *Archivos de la represión y la memoria*, which has enabled us to substantially expand our understanding of the recent past. In this article we will present a description of the documents digitized in the website of the *Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea*. Although these documents offer a lot of information about the policy of the last dictatorship, it contains a set of 27 documents about the University during this period. What is relevant here is that these documents do not refer to a particular university, but gives us a broad picture of the university life from the various actors as ministers, rectors, soldiers, intelligence agents and students, coming from different careers, faculties and universities.

Keywords: university - dictatorship - archive - records - digitization

* Investigadora del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) de la Universidad Nacional de La Plata y profesora adjunta del Departamento de Sociología de la misma Universidad. Se ha especializado en historia y sociología de la educación; historia de la universidad; y en historia social y política de las dictaduras.

Introducción

En la actualidad contamos con un conjunto muy valioso de fondos documentales vinculados a los llamados “Archivos de la represión y la memoria”, que nos han permitido ampliar sustancialmente nuestra comprensión del pasado reciente. De este grupo podemos mencionar el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA); el Archivo Nacional de la Memoria; el Archivo Memoria Abierta; el Archivo del Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario; el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina (CEDINCI); el Fondo CAL del Departamento del Archivo Intermedio (Archivo General de la Nación); los Decretos Secretos y Reservados firmados por el general Videla; y las Actas del Comité de Derechos Humanos de la ONU; entre otros (Canelo, Franco y Manzano, 2016). En relación a los fondos documentales sobre la universidad y el pasado reciente, indicaremos a modo de ejemplo, los ubicados en las Universidades Nacionales de Buenos Aires (Buchbinder y Spoliansky, 2015); La Plata (Casareto, 2015; Lanteri, 2015) y San Luis (Rivero, 2015).

En este artículo presentaremos una descripción del fondo documental que se encuentra digitalizado en el sitio de la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea. Si bien dicho acervo ofrece numerosa información sobre la política de la última dictadura, contiene un conjunto de 27 documentos acerca de la universidad durante esa etapa. Lo relevante en este caso es que los documentos disponibles no se refieren a una casa de estudio en particular, sino que nos brindan un panorama amplio de la vida universitaria a partir de los distintos actores como ministros, rectores, militares, agentes de inteligencia y estudiantes, provenientes de diferentes carreras, facultades y universidades.

Ahora bien, este trabajo está estructurado en seis apartados, en el primero reseñaremos la historia del archivo de la Fuerza Aérea y el hallazgo que se produjo en el año 2013 de la documentación sobre el pasado reciente; luego presentaremos los documentos digitalizados que serán analizados; en el tercer apartado resumiremos las principales cuestiones alrededor de la universidad durante la última dictadura; y en los siguientes desarrollaremos más extensamente el contenido de los documentos referidos a la situación de las universidades, el cierre de la Universidad Nacional de Luján, los “problemas” en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad Católica de La Plata (privada), y las opiniones de los rectores de universidades públicas y privadas vinculados al anteproyecto de la ley universitaria. Para terminar, ofreceremos algunas reflexiones finales sobre la importancia de este fondo documental.

Breve historia de la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea y el Anexo de la Biblioteca Nacional de Aeronáutica

El 20 de noviembre de 1945 se creó el Archivo General de Aeronáutica con el propósito de recibir y custodiar la documentación que forma el acervo histórico y documental de la Fuerza Aérea.¹ En diciembre de 1968 pasó a denominarse Archivo de la Fuerza Aérea con dependencia de la Secretaría General del Comando en Jefe, aunque permaneció varios años prácticamente paralizado. Luego de varios episodios donde hubo que trasladar la documentación, en noviembre de 1981 se elevó un proyecto para reorganizar y jerarquizar el Departamento de Estudios Históricos. En marzo de 1982 se aprobó lo propuesto y se creó la Dirección de Estudios Históricos que incluía el Archivo Histórico. El 9 de abril de 1984 se inició la mudanza de la totalidad de la documentación y el mobiliario de la Dirección al edificio ALAS, donde se ubica actualmente, con entrada en Viamonte 153.

En la actualidad, la Dirección de Estudios Históricos coordina la Comisión Asesora de Historia de la Fuerza Aérea, mantiene relación directa con el Instituto de Historia Militar del Ejército Argentino, el Instituto Nacional Newberiano, la Asociación Aeronáutica Argentina y la Academia Nacional de Historia. Además, integra el Programa de Modernización de Archivos para el Área de la Defensa, promovido por el Ministerio de Defensa y tiene a su cargo la documentación preservada en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica.

El 31 de octubre de 2013, mientras se realizaban tareas de mantenimiento en el subsuelo del edificio Cóndor, fueron hallados archivos secretos pertenecientes a la última dictadura cívico- militar. Ese material se encuentra actualmente en el Anexo Biblioteca Nacional de Aeronáutica, ubicado en Paraguay 748. Allí se encuentran 80 cajas de la Secretaría General de la Junta Militar (1976-1983) y 120 cajas de la Secretaría General de la Fuerza Aérea (1970-1985). Asimismo, en la página web institucional pueden consultarse los documentos que describen el Fondo, cómo utilizar el inventario, qué tipo de información contiene el "inventario de armario" (corresponde a la documentación que se hallaba ubicada dentro del mobiliario y dos cajas fuertes), y el "inventario de hilera" (que ofrece el detalle de la documentación ubicada sobre una estantería y que estuvo expuesta a la intemperie).²

En el sitio oficial están disponibles diversos documentos digitalizados para la consulta en línea, como las "Actas de la Junta Militar" y sus seis tomos, que abarcan distintos períodos: Tomo Nº 1 (19/07/1976 a 15/09/1977); Tomo Nº 2 (29/09/1977 a

¹Todos los datos de este apartado han sido extraídos de
http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/datos_de_la_institucion_archivistica.pdf

² <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/Documentos.php?documentos=edificioCondor>

06/07/1978); Tomo Nº 3 (11/07/1978 a 11/09/1979); Tomo Nº 4 (19/12/1979 a 02/02/1982); Tomo Nº 5 (09/02/1982 a 06/04/1983); y Tomo Nº 6 (14/04/1983 a 24/11/1983). Están también para la consulta documentos como las “listas negras” de artistas, músicos, intelectuales y periodistas que fueron prohibidos; documentos sobre la complicidad con la dictadura de las empresas y la banca nacional (ADEBA Parte I y II); y un apartado específico referido a la “Política universitaria de la Dictadura Militar” que pasaremos a comentar.

Los documentos digitalizados referidos a la universidad

El conjunto de 27 documentos que relatan lo ocurrido en la universidad, puede ser dividido en dos grandes grupos, el primero, que contiene los primeros 15, se refieren mayoritariamente a algunas normas sancionadas en 1976, 1977 y 1980 y a la gestión del tercer ministro de Cultura y Educación, Juan R. Llerena Amadeo. En particular, las fuentes se concentran en los argumentos que dio el ministro sobre las universidades que consideraba “problemáticas” y las cuestiones que giraron alrededor del anteproyecto de ley universitaria. El segundo grupo de documentos se concentra en el período de 1981 a 1983 y hace foco en lo sucedido con los servicios de inteligencia en el marco de las elecciones estudiantiles de 1982.³ En los apartados que siguen nos abocaremos a contextualizar y citar partes del contenido de los 10 documentos pertenecientes al primer conjunto y que pasamos a detallar en el siguiente cuadro:

Cuadro sobre las fuentes documentales que se analizarán

Ley Nº 21.276 (Junta Militar – PEN) para normalización de las universidades nacionales. Año 1976, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/A1-00-00-08-00-02-001-CC-PDF.pdf>

PEN 32 (CAL) Año 1977. Mensaje y proyecto de ley por el cual se deroga el artículo 3º de la Ley Nº 21.276, para restituir al Poder Ejecutivo Nacional la capacidad de designar a los rectores o presidentes de las universidades nacionales, y a los directores o decanos de las unidades académicas, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-01-03-11-01-00-001-CC-PDF.pdf>

PEN 21 (CAL – Subcomisión 3) Año 1980. Proyecto de Ley Nº 22.173 que propone unificar la Universidad de la Patagonia “San Juan Bosco” y la Universidad Nacional de la Patagonia

³ Todos estos documentos han sido utilizados en mi libro sobre la universidad, ver Rodríguez (2015).

en un organismo universitario bajo la denominación de Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco", disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-04-02-05-00-17-001-CC-PDF.pdf>

PEN 38 (CAL) Año 1980. Versión taquigráfica del plenario de la CAL sobre la creación de una ley universitaria. Cuenta con la participación del ministro de Cultura y Educación, Juan Rafael Llerena Amadeo, que trata en particular la situación de la Universidad de Lujan, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-001-CC-PDF.pdf>

PEN 38 (CAL - antecedentes) Año 1980. Versión taquigráfica de la reunión de la Subcomisión N° 3 (Ministerio de Cultura y Educación) de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, en la que se da tratamiento a la ley universitaria, disponible en *Comisión de Asuntos Legislativos*, subcomisión N° 3, reuniones de los días 22 febrero y 25 febrero de 1980. <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-002-CC-PDF.pdf>

PEN 38 (CAL - antecedentes) Año 1980. Versión taquigráfica de la reunión de la Subcomisión N° 3 (Ministerio de Cultura y Educación) de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, en la que se trata la Ley Universitaria y, en particular, los puntos del proyecto de ley referidos a las universidades privadas, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-003-CC-PDF.pdf>

PEN 38 (CAL - antecedentes) Año 1980. Versión taquigráfica de la reunión de la Subcomisión N° 3 de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que trata la ley universitaria, en la que participan como invitados representantes de diversos consejos, colegios y asociaciones de profesionales, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-004-CC-PDF.pdf>

PEN 38 (CAL – antecedentes) Año 1980. Cronología de la legislación universitaria argentina y síntesis de sus diferentes ordenamientos, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-005-CC-PDF.pdf>

PEN 38 (CAL – antecedentes) Año 1980. Tratamiento de la ley universitaria. Cuadro comparativo de leyes y proyectos de ley que tienen relación con las universidades, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-006-CC-PDF.pdf>

PEN 21 (CAL – Subcomisión 3) Año 1980. Proyecto de Ley N° 22.173 que propone unificar la Universidad de la Patagonia "San Juan Bosco" y la Universidad Nacional de la Patagonia en un organismo universitario bajo la denominación de Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco", disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-04-02-05-00-17-001-CC-PDF.pdf>

El contexto: universidad y dictadura

A partir del golpe del 24 de marzo de 1976, las políticas diseñadas para la universidad desde el Ministerio de Cultura y Educación se concentraron en el control ideológico y la represión hacia las personas, la prohibición de autores, editoriales y contenidos de diferentes tipos de textos (Kaufmann, 2001; Invernizzi y Gociol, 2002). En base a un diagnóstico que afirmaba que existía un “excesivo” número de universidades y alumnos, se plantearon medidas para reducir la matrícula por medio de la restricción al ingreso con la implementación de los cupos y exámenes eliminatorios, el arancelamiento de diversos trámites administrativos y la supresión o fusión de casas de estudios, Facultades y carreras (Rodríguez, 2015). El resultado fue una disminución significativa de la matrícula estudiantil en las universidades más antiguas y ubicadas en los grandes centros urbanos (Buchbinder, 2005). En un contexto de disminución del presupuesto se desplazó la investigación hacia ámbitos extra-universitarios como los institutos, resignando su calidad particularmente en el área de las Ciencias Sociales (Vessuri, 1992; Pagano, 2004; Bekerman, 2009; Rodríguez, 2015).

En base al diagnóstico de que “el problema de la subversión encontró en las universidades un campo propicio para su desenvolvimiento”, el presidente de facto -el teniente general Jorge Rafael Videla- dispuso que las universidades quedaran bajo el control del Poder Ejecutivo Nacional (Ley N°21.276) y se dictaminó la potestad del presidente para la designación de rectores y decanos.⁴

La cuestión universitaria no le resultó ajena a la Fuerza Aérea en esos años. El 29 de marzo de 1976 se publicó una resolución que ordenaba el cese en sus funciones de los rectores, Consejos y demás cuerpos colegiados directivos. Se designaron “delegados militares” o “interventores” al frente de las 26 Universidades Nacionales siguiendo el criterio de distribución tripartito entre las Fuerzas, que en términos generales se cumplió en todos los ámbitos de gobierno: 7 universidades fueron puestas bajo el mando de la Fuerza Aérea, 12 del Ejército y 7 de la Armada. La Fuerza Aérea designó interventores en: Córdoba, Entre Ríos, Río Cuarto, centro de Buenos Aires, Cuyo, San Luis y en la Tecnológica. El Ejército nombró delegados en: Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta, La Pampa, Luján, Rosario, Comahue, Nordeste, Misiones, San Juan y Litoral. La Armada controlaba las universidades de: Buenos Aires, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Santiago del Estero, Sur y Patagonia. Estos delegados permanecieron unos meses hasta que a mediados de ese año fueron reemplazados por rectores civiles en la mayoría de los casos.

⁴ Ley N° 21.276 (Junta Militar – PEN) para normalización de las universidades nacionales. Año 1976, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/A1-00-00-08-00-02-001-CC-PDF.pdf>

Los ministros de Cultura y Educación fueron cinco funcionarios civiles y durante dos períodos estuvo el ministro del Interior, el general Albano E. Harguindeguy: Ricardo Pedro Bruera (marzo 1976- abril y mayo 1977); Harguindeguy (mayo -junio 1977); Juan José Catalán (junio 1977- agosto 1978); Harguindeguy (agosto a noviembre 1978); Juan Rafael Llerena Amadeo (noviembre 1978- marzo 1981); Carlos A. Burundarena (marzo 1981- diciembre 1981) y Cayetano Licciardo (diciembre 1981 - diciembre 1983).⁵

La sanción de la ley universitaria en 1980 que, entre otras, instauró el arancel, no hizo más que profundizar la crisis, en un contexto de creciente desprestigio del Gobierno dictatorial (Rodríguez, 2015). Desde marzo de 1981 el escenario político y social se modificó sustancialmente durante la presidencia del general Roberto Viola debido al rechazo a la política económica gubernamental, la ausencia de liderazgo político y el creciente aumento de la protesta social (Canelo, 2008).

El contenido de los documentos: los “problemas” en las universidades

Como puede apreciarse, uno de los documentos citados en el cuadro anterior, menciona una reunión que convocaron los integrantes de la Comisión de Asesoramiento Legislativo [en adelante CAL] en febrero de 1980, con el ministro Llerena Amadeo. La CAL estaba conformada por miembros de las distintas Fuerzas y cumplía funciones del Congreso Nacional.⁶ En el encuentro, el ministro explicó a los militares que se había dedicado en ese tiempo de su gestión a visitar y conocer las universidades. De esos viajes había detectado que tres universidades tenían “problemas”: Comodoro Rivadavia (UN de Patagonia), Entre Ríos y Luján. Por esta razón, en marzo de 1979, continuaba, había dejado sin rectores a esas tres universidades y había designado a funcionarios interinos.

De acuerdo al ministro, el conflicto en Comodoro Rivadavia era que existía desde los años de 1960 una sola universidad privada confesional, la Universidad “San Juan Bosco”, que se vio directamente afectada por la creación de una universidad pública a mediados de 1974. El ministro informó a los militares de la CAL que decidió darle

⁵ En 1977 se restituyó al PEN la potestad para designar a las autoridades universitarias. Ver PEN 32 (CAL) Año 1977. Mensaje y proyecto de ley por el cual se deroga el artículo 3° de la Ley N° 21.276, para restituir al Poder Ejecutivo Nacional la capacidad de designar a los rectores o presidentes de las universidades nacionales, y a los directores o decanos de las unidades académicas, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-01-03-11-01-00-001-CC-PDF.pdf>

⁶ PEN 38 (CAL) Año 1980. Versión taquigráfica de plenario de la CAL que trata la creación de una ley universitaria. Cuenta con la participación del ministro de Cultura y Educación, Juan Rafael Llerena Amadeo, que trata en particular la situación de la Universidad de Lujan, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-001-CC-PDF.pdf>

una “solución” a la situación y en 1979 firmó un convenio con el obispo de esa ciudad, donde se fusionaba la Universidad Nacional de la Patagonia con la Universidad privada confesional de la “Patagonia San Juan Bosco” (Decreto 2.318/79). En nombre de la “política de redimensionamiento para las Universidades Nacionales”, en febrero de 1980 se aprobó la Ley 22.173 que unificaba las dos casas.⁷

En esa misma reunión de la CAL, Llerena Amadeo pasó a referirse a la UN de Entre Ríos y las dos Facultades – Ciencias Económicas e Ingeniería- que habían pertenecido a la Universidad Católica Argentina (UCA). El ministro explicó que ambas tenían “bajo nivel académico” y que había propuesto cerrarlas. Finalmente, decidió dejar en funcionamiento la Facultad de Ciencias Económicas y clausurar la Facultad de Ingeniería de la UN de Entre Ríos (Decreto 47/80). Los estudiantes y docentes pasaron a depender de la Facultad Regional de Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional y el personal administrativo quedó en la de Entre Ríos.

El documento sobre ese encuentro de la CAL muestra acabadamente que de todas estas “reestructuraciones”, la medida que provocó más resistencias fue el cierre de la UN de Luján, que fue criticada incluso por los aliados al régimen. Al hacerse público ese plan, el rector en funciones presentó su renuncia. La disposición del 20 de diciembre de 1979 ordenaba cerrar la Universidad por “falta de nivel académico y la inutilidad de algunas de sus carreras”. Se aclaraba que algunas carreras seguirían funcionando en la UBA. El ministro afirmó que con ello se buscaba poner en marcha un plan “destinado a revertir el proceso de expansión del sistema universitario iniciado alrededor de los años de 1970”. La comunidad universitaria describió el proyecto como un “atropello” y un “agravio”.

Lo cierto fue que los militares en el seno de la CAL también criticaron la clausura, entre otras cosas, porque era contradictoria con la política oficial, ya que sobredimensionaba otras universidades como Buenos Aires. Los militares le manifestaron al ministro que pensaban que cerrando los cuatro Centros Regionales era suficiente. Asimismo, le preguntaron con insistencia si no podía haberse hecho con Luján lo mismo que en San Luis, Salta y Río Cuarto.⁸

⁷ PEN 21 (CAL – Subcomisión 3) Año 1980. Proyecto de Ley N° 22.173 que propone unificar la Universidad de la Patagonia “San Juan Bosco” y la Universidad Nacional de la Patagonia en un organismo universitario bajo la denominación de Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-04-02-05-00-17-001-CC-PDF.pdf>

⁸ PEN 38 (CAL) Año 1980. Versión taquigráfica de plenario de la CAL que trata la creación de una ley universitaria. Cuenta con la participación del ministro de Cultura y Educación, Juan Rafael Llerena Amadeo, que trata en particular la situación de la Universidad de Luján, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-001-CC-PDF.pdf>

A su turno, Llerena Amadeo se defendió explicando que los profesores de Luján tenían “bajo nivel académico”. Además, que la mayoría era de dedicación exclusiva o semi porque casi todos eran de Buenos Aires y el tiempo de viaje – a Luján y a los Centros Regionales de Chivilcoy, Nueve de Julio, Campana y José C. Paz- se les calculaba dentro de la dedicación, por lo que se gastaba demasiado presupuesto en esa sola universidad. Por otra parte, trasladar una parte de las carreras a la UBA era, para él, un aseo para el futuro:

“[...] el día de mañana quien quiera suprimir esta situación para volver a una Universidad de Luján tendrá el problema con la universidad de Buenos Aires [...] En cambio, si nosotros hubiéramos hecho la supresión lisa y llana de la universidad de Luján, no sólo hubiéramos cometido un error en muchos sentidos sino que también políticamente hubiéramos posibilitado en el día de mañana un resurgimiento de esa universidad, como una reivindicación. Por el contrario, si el día de mañana tiene que hacerse una Universidad Nacional en Luján, no se va a poder dejar de lado toda la actividad académica – de nivel espero que excelente- que pueda desarrollar la UBA en ese campo de 250 ha”.⁹

A medida que avanzaba en su argumentación, iba quedando más claro que además, lo motivaban cuestiones personales con el ex rector Emilio F. Mignone, militante católico, a quien los militares hicieron desaparecer a su hija, estudiante de la Universidad del Salvador. Llerena Amadeo acusó a Mignone ante los militares de la CAL de promover el avance “socialista” y la “subversión” y de estar vinculado a organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Dijo que la UN de Luján fue una casa de estudio concebida para:

“dar un ejemplo a Latinoamérica de cómo podría ser la universidad del futuro en una estructuración socialista. Yo estaba en la OEA en esa época como presidente del Comité Interamericano de Educación y pude saber que se pagaron contratos al doctor Emilio Mignone para presentar el esquema de universidad que debía generalizarse por Latinoamérica. Y ese contrato se hizo por parte del actual secretario ejecutivo para la Educación, Ciencia y Cultura de la OEA, señor González Reyes, que es un venezolano de izquierda, agitador estudiantil. Ese estudio se llevó a todas las organizaciones universitarias de Latinoamérica de izquierda [...] Pero en cambio en la universidad de Luján se hizo todo una concepción tendiente a tener presente esa universidad del futuro, y de un futuro estructurado de una manera socialista en toda América. [...] Mignone fue rector

⁹ PEN 38 (CAL) Año 1980. Versión taquigráfica de plenario de la CAL que trata la creación de una ley universitaria. Cuenta con la participación del ministro de Cultura y Educación, Juan Rafael Llerena Amadeo, que trata en particular la situación de la Universidad de Luján, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-001-CC-PDF.pdf>

durante los años del loquero [1973-1976] y el experto internacional que había presentado al mundo latinoamericano las excelencias de esta nueva universidad tipo. Fíjense que nosotros tenemos graves dificultades con la permanencia en Argentina de CLACSO, apéndice de FLACSO, que encauza los fondos internacionales a sectores muy allegados a todo lo que pueda ser la subversión [...] Los créditos que vienen de todos esos sectores para algunos proyectos internacionales se encauzan con gente que en general es de la Universidad de Luján [...] Mignone está en OEA en 1968 y consigue ir a CONADE manteniendo su cargo en la OEA, incluso no podía ser un experto argentino en la Argentina, podía ir al Uruguay, pero no en la Argentina, esas eran las normas de OEA. Permanece en CONADE, pasa a CONASE y luego es designado subsecretario. Tuvo intervención en todo eso y en la gestación prácticamente de la Universidad y se aprovecha la posibilidad que brindan los enunciados del Plan Nacional de Desarrollo 1971 para llevar a la práctica este tipo de universidad”.¹⁰

Con relación a los organismos internacionales, completó su idea contando que hacía poco estuvo con un funcionario de la UNESCO “de origen ruso [...] que nos vino a proponer que Argentina sea sede de un Congreso de investigación en Ciencias Sociales en el mes de noviembre, organizado por CLACSO en Argentina. Le comunicamos que no queríamos ser sede de la institución: tomamos el congreso pero para manejarlo nosotros. Le dijimos bien claro que con CLACSO nada que ver”.¹¹

Al parecer, estos argumentos fueron muy convincentes a favor del cierre definitivo, ya que unos días después Llerena Amadeo dio a conocer el Decreto 22.167 aprobado en la CAL, donde se derogaba la Ley Nº 20.031 de 1972 de creación de la UN de Luján.

En esa misma alocución, el ministro contraponía la situación de Luján con la UN de Lomas de Zamora. Explicaba que si bien esta última también tenía un “bajo nivel académico”, no convenía cerrarla porque estaba situada en una zona de influencia de 4 millones de habitantes y podía convocar a profesores de La Plata y Buenos Aires sin mayores costos, otorgando dedicaciones simples.¹² Finalmente, el ministro

¹⁰ PEN 38 (CAL) Año 1980. Versión taquigráfica de plenario de la CAL que trata la creación de una ley universitaria. Cuenta con la participación del ministro de Cultura y Educación, Juan Rafael Llerena Amadeo, que trata en particular la situación de la Universidad de Luján, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-001-CC-PDF.pdf>

¹¹ PEN 38 (CAL) Año 1980. Versión taquigráfica de plenario de la CAL que trata la creación de una ley universitaria. Cuenta con la participación del ministro de Cultura y Educación, Juan Rafael Llerena Amadeo, que trata en particular la situación de la Universidad de Luján, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-001-CC-PDF.pdf>

¹² PEN 38 (CAL) Año 1980. Versión taquigráfica de plenario de la CAL que trata la creación de una ley universitaria. Cuenta con la participación del ministro de Cultura y Educación, Juan Rafael

explicó que otra de las casas de estudio que poseía “muy bajo nivel” era la Universidad Católica de La Plata (UCALP).¹³ Criticó la política del rector Nicolás Argentato – que en ese momento era además el vicepresidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP)-, quien estaba creando subsedes de la UCALP sin autorización del Ministerio. El ministro explicó que el problema era que en las subsedes pretendían duplicar las actividades de La Plata, lo que iba en contra de las restricciones que él estaba promoviendo en el orden estatal.

Los rectores ante la CAL y el anteproyecto de ley universitaria

Como vimos en el cuadro presentado, otro de los documentos que pueden consultarse en forma digital, trata de una nueva reunión que organizó la CAL en febrero de 1980, para hablar del anteproyecto de ley universitaria. A principios de 1979 Llerena Amadeo hizo circular un documento de base o anteproyecto de ley universitaria, que había sido elaborado por la Secretaría de Planeamiento de la Presidencia de la Nación e inició una etapa donde les pidió opinión a diferentes especialistas. Desde ese momento, se publicaron en la prensa una serie de comentarios acerca de esta propuesta. Representantes de universidades públicas y privadas se declararon a favor del anteproyecto, otros criticaron puntualmente ciertas partes, como la que definía la imposibilidad de ejercer un cargo jerárquico en la universidad y tener actividad político- partidaria (art. 4); o bien la que establecía algún tipo de participación de los alumnos.

Los militares de la Comisión convocaron a los rectores de las universidades nacionales para conocer su opinión sobre el anteproyecto. Estuvieron Lucas Lennon de la UBA, Humberto Riccomi de Rosario, Pedro Santos Martínez de Cuyo, Carlos Storni de Lomas, Raúl R. Cruz del Centro y Alfredo N. Navarro de Mar del Plata.¹⁴ En esa reunión, los militares les preguntaron sobre distintos artículos y especialmente acerca del régimen de concurso para seleccionar a los profesores (artículos 23 y 25). Riccomi expresó su coincidencia con el artículo cuarto, para evitar que la universidad

Llerena Amadeo, que trata en particular la situación de la Universidad de Lujan, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-001-CC-PDF.pdf>

¹³ PEN 38 (CAL) Año 1980. Versión taquigráfica de plenario de la CAL que trata la creación de una ley universitaria. Cuenta con la participación del ministro de Cultura y Educación, Juan Rafael Llerena Amadeo, que trata en particular la situación de la Universidad de Lujan, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-001-CC-PDF.pdf>

¹⁴ PEN 38 (CAL - antecedentes) Año 1980. Versión taquigráfica de la reunión de la Subcomisión N° 3 (Ministerio de Cultura y Educación) de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, en la que se da tratamiento a la ley universitaria, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-002-CC-PDF.pdf>

“sea politizada como ocurrió en épocas anteriores”. Santos Martínez recordó otros episodios negativos de la “politización” y puso como ejemplo la época en que el presidente de Chile, Salvador Allende, había sido derrocado, y viajaron a Mendoza asesores, profesores, alumnos y egresados chilenos que sostenían que “el golpe revolucionario que habían sufrido era una vergüenza y pedían minutos de silencio y homenajes a los caídos”.

Respecto a los concursos, luego de contar cómo funcionaban supuestamente mejor en otros países (España, Francia, Bélgica, Inglaterra y Alemania), relataron sus propias experiencias como profesores concursados. No dudaban en calificarlas negativamente: “pésima” según Riccomi o “tremenda” de acuerdo a Navarro. Santos Martínez explicó que el concurso en Argentina era un “streap-tease académico”, frente a un público constituido por el jurado, alumnos, colegas, ordenanzas e incluso por “gente que pasaba por la calle”. Navarro dijo que era contrario al concurso, pero comprendía también que no existía otra forma: “Si adoptáramos otro sistema se generaría un conflicto muy serio”.

El problema más grave con los concursos, decía Riccomi, era que se presentara a concursar un ideólogo “del cual estamos absolutamente seguros que es el causante teórico de la subversión” pero “estuvo en el extranjero mientras ustedes lo perseguían [las Fuerzas Armadas], capacitándose en Harvard, Lovaina, París o en la Universidad Católica de Estados Unidos, donde está en este momento el decano comunista que tuvimos en la Facultad de Medicina de Rosario”. Entonces “¿quién le va a discutir que no tiene antecedentes para su materia y quién va a probar que ha desarrollado actividades subversivas si nunca lo detuvieron?”. En esos casos, seguía, deberían actuar los militares del Proceso, “De lo contrario [...], por mejores intenciones que pongamos y por muy buenas leyes que tengamos, dentro de 10 años en la universidad tendremos lo mismo que se tuvo en 1973”.

Navarro pensaba que había que “tolerar que haya en la universidad un porcentaje de marxistas”, a lo que Riccomi le contestó que si era un 10 por ciento no había problema, “sería elegante frente al mundo. Yo conservaría, dentro de mi claustro, algún comunista de Moscú por elegancia, porque me permitiría plantearle a cualquiera que me haga objeciones que tengo a este conocido comunista”. El problema se presentaba si eran el 51 por ciento, porque se entorpecía toda la vida universitaria y al poco tiempo se tenía “subvertida toda la universidad”. Cruz agregó que había que confiar en tratar de “evitar la infiltración”. Santos Martínez concluyó que lo único que podría hacerse era “eliminar el carácter público y buscar una fórmula semejante al concurso de títulos y antecedentes” y organizar jurados que “nos den garantías”.

Posteriormente hablaron de dedicaciones exclusivas, juicios académicos, edad de jubilación y el gobierno de la universidad. En un momento, el presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos, el capitán de fragata Von Wernich, indicó a su

secretario que suspendiera el registro de la versión taquigráfica, por lo que inferimos que continuaron deliberando otros temas de carácter secreto, probablemente vinculados a la represión.¹⁵

Los documentos nos informan que se hizo otra reunión con los rectores de las universidades privadas: Nicolás Argentato de la Católica de La Plata; Francisco J. Piñón del Salvador y el almirante Leandro Maloberti del Instituto Tecnológico de Buenos Aires - ITBA.¹⁶ Los funcionarios fueron convocados porque los cuatro primeros artículos del anteproyecto de ley afectaban a las casas de estudio privadas. El rector Piñón hizo saber su preocupación porque en esos articulados se decía que las universidades debían cumplir tres funciones y que entre las privadas, existían casas de estudio que no se dedicaban a la investigación pura, aplicada o a la creación artística (art. 3, inciso b). Proponía que se reemplazara la expresión “deberán” por la de “procurarán”, cuestión que no fue atendida.¹⁷ Luego opinaron acerca de la incompatibilidad entre la función en la universidad con la actividad política partidaria, cuestión sobre la cual se manifestaron a favor. La comisión les preguntó cómo resolvían las universidades privadas el tema de los concursos docentes, a lo que respondieron que no había un solo criterio y que dependía de los fines particulares de cada casa. Argentato agregó que él sí había concursado en las universidades nacionales y consideraba que los concursos habían sido “experiencias desagradables” y no daban ningún “resultado positivo”. Los encargados de la CAL les preguntaron cómo estaban organizadas las universidades privadas en relación a los órganos de conducción y los rectores explicaron que eso también variaba según

¹⁵ Los militares elaboraron otros materiales referidos a la ley, ver PEN 38 (CAL – antecedentes) Año 1980. Cronología de la legislación universitaria argentina y síntesis de sus diferentes ordenamientos, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-005-CC-PDF.pdf>

PEN 38 (CAL – antecedentes) Año 1980. Tratamiento de la ley universitaria. Cuadro comparativo de leyes y proyectos de ley que tienen relación con las universidades, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-006-CC-PDF.pdf>

¹⁶ PEN 38 (CAL - antecedentes) Año 1980. Versión taquigráfica de reunión de la Subcomisión N° 3 (Ministerio de Cultura y Educación) de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, en la que se trata la ley universitaria y, en particular, los puntos del proyecto de ley referidos a las universidades privadas, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-003-CC-PDF.pdf>

¹⁷ PEN 38 (CAL - antecedentes) Año 1980. Versión taquigráfica de reunión de la Subcomisión N° 3 (Ministerio de Cultura y Educación) de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, en la que se trata la ley universitaria y, en particular, los puntos del proyecto de ley referidos a las universidades privadas, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-003-CC-PDF.pdf>

cada casa de estudio: las había dependientes del Arzobispado y la figura del Gran Canciller, de Fundaciones y otras que eran asociaciones civiles.¹⁸

Reflexiones finales

En este trabajo presentamos el contenido de algunos documentos que integran un Fondo más amplio que se descubrió en 2013 dentro del Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea. Consideramos que resulta muy importante caracterizar este Archivo por dos cuestiones fundamentales: porque usualmente no se lo relaciona con las investigaciones sobre la universidad y por su nivel de accesibilidad, al estar en formato digital y disponible en línea. Hemos hecho foco sobre todo en las Actas de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), aunque fuimos incorporando en las referencias a los demás documentos. Dicho material nos permitió identificar cuestiones vinculadas a las medidas que se tomaron en esos años y rescatar la voz de los máximos responsables de las políticas, por ejemplo, los ministros y los rectores. Como ya se ha señalado, las Actas de la Comisión de Asesoramiento Legislativo – disponibles hoy en papel en otras Bibliotecas y Archivos- son una fuente novedosa e imprescindible para reconstruir el pasado dictatorial y han sido consideradas en su momento como el mayor hallazgo documental de las últimas décadas sobre la dictadura (Franco y Canelo, 2015). Sin lugar a dudas, este acervo nos ha ayudado a comprender mejor distintos aspectos del pensamiento de los actores de esa época, así como los acuerdos y desacuerdos entre los representantes del régimen. Al ser documentos que no tenían estado público, su riqueza reside en que los funcionarios sentían mayor libertad para expresarse y desarrollar sus argumentos, en un registro completamente diferente al que empleaban cuando hablaban ante la prensa. De todos modos, es preciso señalar que estos documentos por sí solos no nos dicen mucho sino los hacemos dialogar con otras fuentes documentales como los diarios de la época, la normativa, la documentación interna de las universidades y, de ser posible, con testimonios orales. En suma, esta presentación intentó mostrar las potencialidades que presentan estas nuevas fuentes para el estudio de la universidad durante la última dictadura.

¹⁸ Los militares citaron luego a asociaciones profesionales, ver PEN 38 (CAL - antecedentes) Año 1980. Versión taquigráfica de la reunión de la Subcomisión N° 3 de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que trata la ley universitaria, en la que participan como invitados representantes de diversos consejos, colegios y asociaciones de profesionales, disponible en <http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/edificioCondor/H1-02-03-04-01-00-004-CC-PDF.pdf>

Bibliografía

Bekerman, Fabiana (2009). "Investigación científica bajo el signo militar (1976- 1983): la bisagra entre el CONICET y la universidad", *Alas. Asociación Latinoamericana de Sociología*, pp. 189-206.

Buchbinder, Pablo (2005) *Historia de las universidades argentinas*, Buenos Aires, Sudamericana.

Buchbinder, Pablo y Spoliansky, Vivian (2015) "El Archivo Histórico de la Universidad de Buenos Aires: notas sobre puesta en valor y su uso para la investigación en historia y memoria", en "Dossier: Archivos, universidades y memorias en Latinoamérica: problemáticas y desafíos en torno a la recuperación, organización y accesibilidad documental", *Aletheia*, 6, (11).

Canelo, Paula y Franco, Marina (2015) "Las 'Actas de la dictadura' y la revitalización de los estudios sobre el Proceso de Reorganización Nacional", en *Defensa Nacional y Pensamiento Estratégico*, N° 2, pp. 84-85

Canelo, Paula, Franco, Marina y Manzano, Valeria (2016) "Introducción al Dossier Dictadura y Estado. La conflictiva y nunca acabada construcción de un campo de estudios", *Papeles de Trabajo*, N° 17, pp. 13-29.

Canelo, Paula (2008) *El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone*, Buenos Aires, UNSAM-Prometeo.

Casareto, Laura M. (2015) "Fotografía, universidad y dictadura: revelar el archivo fotográfico: imágenes oficiales de la gestión Gallo en la Universidad Nacional de La Plata (1976-1983)", *Aletheia*, N° 6, (11).

Casareto, Samanta y Casareto, Laura (2015) "Introducción. Rastros y restos de Archivo: una aproximación al territorio de los documentos universitarios", en "Dossier: Archivos, universidades y memorias en Latinoamérica: problemáticas y desafíos en torno a la recuperación, organización y accesibilidad documental", *Aletheia*, N° 6, (11).

Kaufmann, Carolina (2001) (dir), *Dictadura y Educación. Tomo 1. Universidad y grupos académicos argentinos (1976-1983)*, Madrid, Miño y Dávila.

Lanteri, Magdalena (2015) "La DIPPBA va a la Universidad. El registro de la vida universitaria por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires", en "Dossier: Archivos, universidades y memorias en Latinoamérica: problemáticas y desafíos en torno a la recuperación, organización y accesibilidad documental", *Aletheia*, N° 6, (11).

Pagano, Nora (2004) "Las ciencias sociales durante la dictadura argentina (1976-1981). En Devoto, Fernando y Pagano, Nora (ed.) *La historiografía académica y la historiografía militante en Argentina y Uruguay*, Buenos Aires, Biblos, pp. 159-170.

Riveros, Sonia E. (2015) "El archivo: testimonio de un espacio habitado entre historia y memoria. Un aporte del Archivo Histórico y Documental de la Universidad Nacional de San Luis", en "Dossier: Archivos, universidades y memorias en Latinoamérica: problemáticas y desafíos en torno a la recuperación, organización y accesibilidad documental", *Aletheia*, Nº 6, (11).

Rodríguez, Laura Graciela (2015) *Universidad, peronismo y dictadura (1973- 1983)*, Buenos Aires, Prometeo.

Rodríguez, Laura Graciela (2015) "Las ciencias sociales durante la última dictadura: agendas, investigadores e instituciones", en GÁRGANO, Cecilia, (comp.) *Ciencia y Dictadura. Trayectorias institucionales, agendas de investigación y políticas represivas en Argentina (1973-1983)*, Buenos Aires, Ediciones INTA, pp. 19-34.

Vessuri, Hebe (1992) "Las ciencias sociales en la Argentina: diagnóstico y perspectivas", en OTEIZA, Enrique (dir.) *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas*, Buenos Aires, CEAL, pp. 339-363.

Construcción colectiva del Centro de Documentación “Universidad y Dictadura” Cátedra Libre de DDHH-FFYL-UBA

Collective Construction of the "Universidad y Dictadura" Documentation Center
Human Rights Chair - Philosophy & Letters Faculty, Buenos Aires University

Recibido: 03/07/2017 – Aceptado: 16/07/17

Samanta Casareto*

samantacasareto@gmail.com

Alba Lombardi**

albalombardi@hotmail.com

Resumen: El Centro de Documentación “Universidad y Dictadura” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires tiene por finalidad ser testimonio y fuente documental para conocer e investigar la memoria histórica institucional de la Facultad de Filosofía y Letras durante el período temporal abarcado entre los años 1966 a 1983, y haciendo hincapié en la reconstrucción de las historias de vida de los compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados que transitaron por la Facultad pero también de todo el resto de la comunidad que fue afectada por el accionar del terrorismo de Estado. Abordaremos aquí su conformación y los desafíos que ella nos presenta.

Palabras clave: Dictadura - Universidad - Centro de documentación.

Abstract: The "University and Dictatorship" Documentation Center of the Faculty of Philosophy and Letters of the Buenos Aires University is intended to serve as testimony and documentary source for the investigation of the historical institutional memory of this Faculty during the period covered between 1966 and 1983, emphasizing the reconstruction of the life histories of the detained, disappeared and murdered who passed through the Faculty but also of all the rest of the community that was also

* Graduada y docente del Departamento de Historia de la FFYL UBA. Master por la Universidad de París I-Sorbonne. Coordina el Programa Internacional de Archivos del Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos para el Cono Sur. Integra el Programa Universidad y Dictadura de la Cátedra Libre de DDHH de la FFYL UBA.

** Licenciada en Historia. Archivista (USAL/ISFDyT N° 8). Tutora del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Se desempeña desde 2007 como técnica en el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Fue asesora archivística del equipo UBACyT "Las implicancias del terrorismo de Estado en la Universidad de Buenos Aires, un abordaje desde la Facultad de Filosofía y Letras", en el marco del programa "Universidad y Dictadura" desde el año 2012 hasta 2015.

affected by the action of the State terrorism. We will approach its conformation and the challenges that it presents.

Keywords: Dictatorship - University - Documentation Center.

Introducción

A partir de 2006, desde la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, se inició un relevamiento documental en los archivos de la Dirección de Alumnos y la Dirección de Personal de la Facultad, que ha dado como resultado la consolidación de la nómina de compañeros detenidos desaparecidos de la institución: estudiantes, docentes y no docentes.

Ese primer material de archivo relevado estaba compuesto por Legajos de personal y de estudiantes, al cual se le aplicaron técnicas de conservación, y posteriormente fue digitalizado. Este primer relevamiento de archivos de la Facultad fue el comienzo de la gestación del Centro de Documentación “Universidad y Dictadura”, una experiencia de reconstrucción colectiva de la memoria histórica en la Facultad de Filosofía y Letras que comenzó en 2012.

El objetivo de este Centro es recopilar de manera sistemática y preservar en soporte digital, material generado por las distintas áreas internas de la Facultad, Departamentos, Institutos, etc., sumados a la generación de nuevas fuentes compuestas por entrevistas orales y colecciones personales.

El colectivo que integra este Programa releva e investiga el material, trabajando con criterios metodológicos y técnicos comunes para que la documentación recopilada sea organizada y almacenada; facilitando su posterior recuperación y permitiendo la difusión, teniendo siempre entre los objetivos crear una base de datos que nos permita compartir y construir colectivamente dentro del sistema universitario argentino, e incluso fuera del mismo.

El presente trabajo tiene por objetivo exponer los objetivos que nos llevaron a comenzar la conformación del Centro de Documentación, cómo estará compuesto y cómo será la accesibilidad al mismo.

Qué entendemos por centro de documentación

Antes de internalizarnos en la descripción del Centro de Documentación que desde la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la

Universidad de Buenos empezamos a construir, tenemos que adentrarnos en qué es un centro de documentación y cuáles son sus objetivos, a fin de no equivocar la metodología a aplicar confundiendo con las de otras ciencias de la información como la archivística y la bibliotecología.

Los centros de documentación son instituciones en las cuales la documentación cumple "una función social importante, al permitir que un sector asimilado al quehacer intelectual... disponga de los recursos de información necesarios para el desempeño de su trabajo y además posibilita que el vasto público pueda acceder a los conocimientos haciéndolo partícipe de los nuevos aportes y de las orientaciones que va aportando el área de su competencia." (Sanchez Lihon, 1983, 62). Los mismos trabajan sobre un fondo de información que "...se concreta, se adapta para la gestión de una institución o de un área de conocimiento específico." (Heredia Herrera, 1995, 167). La documentación se reúne, se clasifica y se ordena determinada por criterios temáticos que forman colecciones, es decir que la clasificación surge de un acuerdo previo basado en la cuál será la mejor manera de organizar la información, y posteriormente brindarla para la consulta de los usuarios.

La tipología documental de la que se compone un centro de documentación no está determinada, sino que depende de todo aquello que se enmarque dentro de la selección de información definida a priori en los objetivos temáticos en los cuales se base la recopilación de documentación deseada por el centro. Las descripciones que se hacen sobre el material de un centro de documentación "...se hacen en único nivel, como resultado de análisis individualizados" (Alberch Fugueras, 2003, 23).

Esto se diferencia de los archivos, que trabajan sobre un fondo documental cuya amplitud está enmarcada en la producción espontánea de documentos de una persona o institución en el cumplimiento de sus misiones y funciones. El orden de los Archivos no es determinado por los usuarios ni por temas, sino respetando los principios de orden original y procedencia. El tratamiento archivístico de los documentos se hace atendiendo a la totalidad de las series documentales, sin extraer ni separar los documentos de su contexto y secuencia de producción, y las descripciones de los mismos pueden hacerse de muchos niveles: fondo, sección, serie, etc.

Cuando nos ocupamos de documentación de archivo, la pieza documental no tiene una existencia aislada del conjunto, sino que es necesario entender la estructura orgánica en la cual está inserta.

Es importante destacar que una gran diferencia del contenido que se puede obtener del documento de Archivo respecto de la documentación que genera, recibe o adquiere un centro de documentación es que la documentación de Archivo existe *a pesar de*, es decir que "...nace espontáneamente como sedimentación documental de una actividad práctica, administrativa o jurídica..." (Alberch Fugueras, 2003: 22), mientras que el material reunido en un centro de documentación es una selección de distintos materiales bibliográficos, hemerográficas, documentos personales o institucionales, etc.

Es decir que la reunión o creación del material es intencional y responde a un recorte temático.

Por otro lado, las bibliotecas trabajan sobre colecciones de libros cuyo ordenamiento proviene, como en el caso de los centros de documentación, de criterios temáticos generales que se hacen previos al orden y, que tienen en cuenta la funcionalidad que tendrá dicho orden para el acceso por parte de los usuarios al mismo. La existencia de dichas colecciones de libros está determinada por una voluntad individual o una demanda social que genera la necesidad de contar con el material bibliográfico.

Nos resultó importante que el colectivo de trabajo del proyecto "Universidad y Dictadura" tuviera en claro esta diferencia al iniciar el trabajo de relevamiento de material documental y bibliográfico, ya que solamente teniendo en cuenta cómo se organizan cada uno de estos lugares, se podrá hacer un mejor aprovechamiento de los materiales buscados por el investigador que releva el material.

A este fin, el Programa organiza encuentros de formación constante dentro de los cuales se abordan distintos temas, tales como el concepto de derechos humanos, el estado terrorista, la militancia en las décadas de los '60 y '70 en Argentina, cuestiones metodológicas sobre realización y guarda de entrevistas orales, formación de archivos orales, digitalización de documentación, conceptos de archivos y centros de documentación (y diferencias entre éstos) normalización, metodología para el tratamiento de la documentación, etc. Por otro lado, desde el equipo se busca articular con otros proyectos de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades nacionales para poder aunar criterios y proponer debates.

Centro de Documentación "Universidad y Dictadura"

El Centro de Documentación que estamos formando tiene por finalidad ser testimonio y fuente documental para conocer e investigar la memoria histórica

institucional de la Facultad de Filosofía y Letras durante el período temporal abarcado entre los años 1966 a 1983, y principalmente la reconstrucción de las historias de vida de los compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados que transitaban por la Facultad pero también poder reconstruir este espacio a nivel académico y social en el marco de las políticas de Terrorismo de Estado. Los objetivos de recopilación documental temática tienen que ver con recuperar la memoria en un sentido amplio: “recuperar las redes de solidaridad, los espacios de militancia, así como los debates teóricos y políticos y las producciones que ellos potenciaron” (Daleo, Casareto, Cabrero, *et. al.*, 2012, 4). Es decir, recuperar de manera plena a los compañeros y la Facultad.

La documentación de la cual se conforma es el resultado del relevamiento y la digitalización de documentación generada principalmente por las áreas internas de la Facultad de Filosofía y Letras (legajos de personal, actas de exámenes, programas de materias, fichas académicas, registros de tesis de licenciatura, reglamentaciones, resoluciones del Consejo Directivo, etc.) y por la generación de entrevistas orales a compañeros, familiares, estudiantes, docentes, etc. A ello le sumamos el material que puedan proporcionar los entrevistados, pero también todo aquello que sobre la Facultad y sus estudiantes, docentes y no docentes detenidos desaparecidos y asesinados se produjo: notas periodísticas, recordatorios, testimonios judiciales, etc. A la documentación de archivo (de la cual se obtiene copias por estar enmarcada en los del proyecto) se les aplica una organización temática.

Digitalización de la documentación

El Centro de Documentación se conforma de documentos en soporte digital. Este soporte nos permite una obtención más sencilla de reprografías del material y tiene ventajas en el plano de la comunicabilidad de la documentación a los usuarios, así como en la no necesidad de ocupar espacio físico, tan problemático en nuestras universidades nacionales. No obstante, para que las reprografías digitales sean confiables y mantengan su integridad, entendimos que era necesario llevar a cabo dicha tarea de acuerdo a una metodología establecida previamente al inicio del trabajo.

Para ello, nos pareció conveniente tomar en cuenta algunas de las *Directrices para proyectos de digitalización de colecciones y fondos de dominio público, en particular para aquellos custodiados en Bibliotecas y Archivos* realizadas por el Consejo Internacional de Archivos y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones.

Adaptando la metodología planteada para archivos y bibliotecas a la dinámica del Centro de Documentación, establecimos que nuestro proceso de digitalización constaría de una primera etapa, en la que se determinan las razones por la cuales se va a digitalizar un tipo de documentación: temas, criterios, etc. En esta etapa se busca implementar una *política de selección*.

Establecimos patrones de resolución de las imágenes que permitan capturarlas de modo que sea posible utilizarlas para guardar una copia maestra, copias de acceso para los usuarios y copias de seguridad con una mayor compresión (IFLA-ICA, 2002, 39). Como las digitalizaciones son realizadas indistintamente por los diferentes miembros del colectivo, además de tomar las copias con una resolución estandarizada, determinamos que cada una de las imágenes que se digitalicen para conformar el Centro de Documentación deben ser registradas por escrito a fin de no repetir trabajo, saber la fecha de realización de la digitalización, el responsable de la misma, las posibles correcciones realizadas sobre la imagen, etc. Por otro lado, desde el comienzo de la actividad se estableció un protocolo para nombrar las imágenes digitalizadas. Dicho protocolo fue pensado principalmente para la documentación digitalizada obtenida en los Archivos de la Facultad de Filosofía y Letras. El nombre de las imágenes responde al principio de procedencia archivístico de la documentación y fue pensado a los fines de normalizar los nombres que se darían a las imágenes y principalmente para poder identificar rápidamente cuál es la estructura orgánica de la institución en la cual se generaron dichos documentos de los cuales en el Centro de Documentación se hace un recorte temático. De esta manera el nombre da cuenta del área, dirección, departamento o instituto dentro del cual se encuentra el material reprografiado, y dicha información sirve de referencia y es útil para aquella persona que quiere profundizar el conocimiento de la serie completa de documentación de la cual fue obtenido.

Es importante llevar un control de calidad sobre el material para cada una de las etapas de la digitalización, para poder garantizar la integridad y consistencia de los archivos de imágenes. Para poder llevarlo a cabo es importante que antes de comenzar a digitalizar se establezcan normas que definan los niveles aceptables de calidad de las imágenes escaneadas basadas en las características de los documentos originales. Se deben evaluar las imágenes obtenidas para comprobar si se ha digitalizado en la resolución establecida, si las imágenes se encuentran en la posición correcta o si se ha salteado alguna.

Entrevistas orales

Sumada a la recepción y conservación de documentos, el Centro se propuso ser creador de *entrevistas orales* que también se conservaran en soporte digital.

La cantidad de entrevistas a realizarse no puede ser determinada de antemano, sino que de a poco se va creando una red de informantes que permite tener distintas ópticas sobre los procesos vividos en el período histórico abordado, y nos aportarán datos relativos a las historias de vida que nos proponemos reconstruir. Las entrevistas orales vienen a complementar y aportar nuevos datos sobre las historias de vida y sobre la institución. Entendemos que es importante evitar la pérdida de esta herencia inmaterial y vulnerable, constituida por los relatos de quienes puedan testimoniar. "...La autoridad del testimonio no consiste en garantizar la verdad factual del enunciado, sino en su capacidad de reformulación – su vitalidad. Es un modo efectivo de propiciar que "tendrá lugar" un discurso que no pudo tenerlo" (Bacci, Oberti y Skura, 2011, 3).

Como Centro de Documentación creador y compilador de entrevistas orales, nuestro aporte es la organización de una colección plural de historias de vida, que trate de registrar, de la forma más densa y plural posible, las experiencias representativas de ese lugar de la memoria (Llona, 2010, 204).

Desde el comienzo de la actividad se establecieron dos planillas a completar para cada entrevista. Teniendo en cuenta que no es una prioridad del Centro transcribir las entrevistas orales, hemos confeccionado una planilla de datos generales de la entrevista que den cuenta de la misma. En dicho instrumento de descripción se detallan:

- Nombre, ocupación y fecha de nacimiento del entrevistado.
- Categoría del Entrevistado: en esta sección se consigna si éste es familiar o compañero de un detenido desaparecido, si fue estudiante, docente o no docente de la Universidad durante el período, etc.
- Fecha en que fue obtenida la entrevista
- Se indica si el entrevistado ya ha dado otras entrevistas y, en caso afirmativo se indica cuándo, en qué carácter y cómo es el acceso a la misma.
- Se indica a qué personas o acontecimientos históricos relevantes nombra a lo largo de la entrevista.

- En el caso de que el entrevistado aporte algún tipo de documentación extra en otro soporte, por ejemplo fotos, apuntes, etc. se deja asentado en la planilla cuáles y sobre quién es el material que aporta.
- Por último, se indica quién realizó la entrevista

Además de completar esta planilla es necesario que el entrevistado firme una autorización por la cual cede los derechos de reproducción, permitiendo el acceso de la entrevista a los futuros usuarios. En este caso si sumaron material personal digitalizado, el mismo será autorizado a integrar el Centro.

Accesibilidad al material del Centro de Documentación

La principal problemática de accesibilidad se relaciona con aquellos documentos que contienen datos personales y sensibles y que por lo tanto podrían enmarcarse en la protección que establece la Ley 25.326. En el marco del proyecto se elevó una propuesta de resolución para reglamentar la cesión al público de los datos sensibles contenidos en los archivos digitalizados, que fue aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad. La misma consiste en guardar una copia digital del acervo documental de acceso limitado en la Biblioteca Central de la Facultad, que será accesible una vez que el usuario complete un formulario con sus datos personales y firma, aceptando conocer la Ley de datos personales y comprometiéndose a no divulgar el nombre del titular del dato sensible eventualmente recabado, realizando la disociación pertinente previa a su eventual divulgación (arts. 5, 7, 11 y 28 de la Ley Nº 25.326). Este formulario será firmado en la oficina de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y dará el acceso a los documentos. El usuario tendrá acceso a la copia digitalizada de los documentos pedidos en su ocasión en la Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía y Letras, sin que ello implique que pueda tener acceso a una copia personal de los mismos. Así, la Facultad retiene el derecho de tratar los datos sensibles y su eventual cesión a terceros cuando defina que dichos datos son de valor histórico (Cabrera, Casareto, Daleo, *et. al.*, 2011, 7).

Conclusiones

A lo largo de esta exposición nos propusimos contar desde una óptica técnica las distintas actividades que se generaron en el Centro de Documentación "Universidad y Dictadura" que se comenzó a gestar en 2006 y se comenzó a sistematizar a partir de 2012.

Desde un primer momento el trabajo colectivo se proyectó con parámetros metodológicos que, si bien pueden ser demasiado formales y técnicos, serán los que nos permitan recopilar, crear, sistematizar y recuperar la vasta y heterogénea documentación que formará parte del acervo documental de nuestro Centro, en el cual se busca recuperar la historia institucional de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos y la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos y asesinados que recorrieron como estudiantes, docentes y no docentes los pasillos de la Facultad.

Entendemos que este proyecto puede ampliarse y referenciarse con el de otras instituciones en las cuales nuestros compañeros victimizados por el terrorismo de estado transitaron, como escuelas medias, otras facultades o universidades, partidos, etc.

También creemos que resulta útil compartir las experiencias del camino transitado, las proyecciones a futuro, las metodologías y procedimientos implementados a fin de armar colectivamente una red de información y documentación que contribuya a recuperar la memoria y la identidad y luchar contra la impunidad, el olvido y el silencio.

Bibliografía consultada

Alberch Fugueras R. (2003). *Los Archivos, entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento*, Barcelona: UOC.

Bacci, C., Oberti, A. y Skura, S. (2011). "Alcances del testimonio del pasado reciente argentino. Una reflexión metodológica".
(http://www.derhuman.jus.gov.ar/conti/2011/10/mesa_21/bacci_oberti_skura_mesa_21.pdf)

Benadiba, L. y Plotinsky, D. (2007). *De entrevistadores y relatos de vida*, Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Cabrera, M., Casareto, S., Daleo, G., Lombardi, A. y Pico, A. (2012). "Universidad y dictadura, una experiencia de reconstrucción colectiva de la memoria histórica en la Facultad de Filosofía y Letras", en *Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos, Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 1, 2 y 3 de octubre de 2012*.

IFLA-ICA. (2002). "Directrices para proyectos de digitalización de colecciones y fondos de dominio público, en particular para aquellos custodiados en Bibliotecas y Archivos" (<http://archive.ifla.org/VII/s19/pubs/digit-guide-es.pdf> - 2013).

Heredia Herrera, A. (1995). *Archivística General: Teoría y práctica*, Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla.

Llona, M. (2010). "Archivar la memoria, escribir la historia. Reflexiones en torno a la creación de un Archivo de Historia Oral: AHOA, Ahozco Historiar en Artxiboa, Archivo de la Memoria", Benadiba, Laura (Compiladora), *Historia Oral. Fundamentos metodológicos para reconstruir el pasado desde la diversidad*, Rosario: Sur América.

Sánchez Lihón, D. (1983). "Bases para la organización de Centros de Documentación", en *Planeamiento, organización y administración de Centros de Documentación*. Lima: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación.

Archivos, memoria, verdad y justicia: la reparación de legajos de no docentes, docentes, estudiantes y graduados de la UNLP

Archives, memory, truth and justice: reparation of files of non-teachers, teachers, students and graduates from the UNLP

Recibido: 03/07/2017 – Aceptado: 11/07/17

Myriam Hara*

myriamhara@hotmail.com

Natalia Salcedo**

nasalcedo@gmail.com

Gerardo Bares***

gerardo.b23f@gmail.com

Ayelén Fiebelkorn****

ayelenfiebelk@gmail.com

Lucía Gandolfi Ottavianelli*****

luciagandolfi@hotmail.com

Resumen: Desde el 2015, una Comisión conformada por un representante de la Prosecretaría de Derechos Humanos, el Archivo Histórico de la UNLP, la Federación Universitaria de La Plata (FULP), la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP) y la

59

* Licenciada en Museología y Repositorios Culturales y Naturales (Universidad Nacional de Avellaneda). Experto Universitario en Gestión Documental y Administración de Archivos (Universidad FASTA). Auxiliar técnico en museo y museóloga (I.S.F.D.Y.T. N° 8, La Plata). Actualmente es la coordinadora del área de conservación del Archivo Histórico de la UNLP, Vicepresidencia Académica, Presidencia de la Universidad.

** Bibliotecaria Documentalista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Estudiante Avanzada de la Carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información (FHaCE). Instituto de Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad (HiTePAC) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP.

*** Arquitecto y Urbanista de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP. Alumno de la Maestría Paisaje Ambiente Cuidado (IIPAC - Fau), Ayudante Ad honorem cátedra Arquitectura 4 (Fau - UNLP).

**** Profesora de Historia graduada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Miembro del equipo del Programa Permanente de Derechos Humanos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la misma universidad. Docente en FHaCE y Becaria doctoral de la UNLP.

***** Profesora de Historia graduada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Personal no docente en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la misma universidad. Miembro del equipo del Programa Permanente de Derechos Humanos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UNLP.

Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP), viene llevando a cabo tareas de reparación documental de los legajos de los detenidos-desaparecidos o asesinados docentes, no docentes, graduados, estudiantes y autoridades de la UNLP. Asimismo, algunas Facultades vienen realizando investigaciones y reconstruyendo la historia de vida de las víctimas del terrorismo de Estado en la UNLP a partir de estos documentos. Este artículo describe las tareas realizadas por el Archivo Histórico de la UNLP en este proceso, y las investigaciones realizadas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad a partir de estos legajos, a través del Programa Permanente de Derechos Humanos.

Palabras clave: Legajos – víctimas – terrorismo de Estado – archivos - UNLP

Abstract: Since 2015, a Commission composed of a representative member of the Human Rights Office, the Historical Archive of the UNLP, the University Federation of La Plata (FULP), the Association of Teachers of the UNLP (ADULP) and the Association of Workers of The UNLP (ATULP), has been carrying out documentary reparations of the files from detained-disappeared or murdered teachers, non-teachers, graduates, students and authorities of the UNLP. Also, some Faculties have been carrying out investigations and reconstructing the life history of the victims of State terrorism in the UNLP from these documents. This article describes the tasks carried out by the Historical Archive of the UNLP in this process, and the research carried out by the Faculty of Architecture and Urbanism of this University from these files through the Permanent Program of Human Rights.

Keywords: files - victims - State terrorism - archives - UNLP

Introducción

Desde el 2015, una Comisión conformada por un representante de la Prosecretaría de Derechos Humanos, el Archivo Histórico de la UNLP, la Federación Universitaria de La Plata (FULP), la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP) y la Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP), viene llevando a cabo tareas de *reparación documental* de los legajos de los detenidos-desaparecidos o asesinados docentes, no docentes, graduados, estudiantes y autoridades de la UNLP. Asimismo, algunas Facultades realizan investigaciones y reconstruyen la historia de vida de las víctimas del terrorismo de Estado en la UNLP a partir de estos documentos.

Durante la Semana de la Memoria realizada en el 2015 y a 39 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, el Presidente de la UNLP, firmó dos resoluciones inéditas en el ámbito universitario nacional. Mediante la Resolución N° 259/15, se

dispuso “la inscripción de la condición de detenido-desaparecido o asesinado, en los legajos de los docentes, no docentes, graduados y estudiantes de esta Universidad”. Se resuelve “dejar constancia en los legajos de los reales motivos que determinaron la interrupción del desempeño laboral o estudiantil de todos aquellos que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar”, como así también “disponer la entrega de una copia de los legajos donde consta la reparación documental registrada, a los afectados y/o familiares que lo soliciten”. Por su parte, la Resolución N° 260/15, resuelve que “un representante del Archivo Histórico debe formar parte de una Comisión para la reparación documental de los legajos de los docentes, no docentes, graduados y estudiantes de esta Universidad que tengan la condición de detenido-desaparecido o asesinado”.

En este marco, la Prosecretaría de Derechos Humanos y el Archivo Histórico comienzan una minuciosa investigación, que da cuenta de que existen cientos de legajos de personal con datos apócrifos que sirvieron para ocultar la verdadera historia de las víctimas del terrorismo de Estado. Muchos integrantes de la UNLP que fueron desaparecidos o asesinados durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, figuran oficialmente como fallecidos, cesanteados en el cargo o incluso en condición de “abandono de tareas”.

En tal sentido y debido a la magnitud de la tarea producto de la persecución de que fueran víctimas los integrantes de la comunidad universitaria y que los legajos de personal son de guarda permanente¹, y también para poder cumplir con el artículo 3° de la Resolución N° 259/15, que establece “la conservación y digitalización de los legajos de personal, a fin que se incorporen al Archivo Histórico de la Universidad, sin perjuicio de la guarda del Legajo original por parte de la Dirección General de Personal”, se decidió una división de tareas en la cual la Prosecretaría de Derechos Humanos sería la encargada de coordinar la búsqueda y la reparación de los legajos de personal en las diferentes dependencias de la Universidad². Asimismo, DDHH se ocupa de redactar las resoluciones que dan lugar a la reparación histórica de las víctimas y también de organizar los actos de entrega de los legajos a sus respectivos familiares. Por su parte, el Archivo Histórico es el encargado de ayudar a cada

¹ Por Resolución Presidencial N° 308/11 del expediente N° 100-9001/11, que aprueba la “Tabla de Plazos Mínimos de Conservación de Expedientes y Documentos” y copia del Decreto N° 1571, del Poder Ejecutivo sobre el mismo tema.

² En 2007 dentro de la Prosecretaría de Derechos Humanos se crea el Programa “en nuestra memoria hoy y para siempre”, por Resolución N° 213/07 que en su Artículo 2° autoriza a requerir directamente de las Unidades académicas y Dependencias los Legajos de personal que fueran detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado.

Unidad Académica en la tareas de la búsqueda de los legajos de personal³, en su posible reconstrucción a través de otros tipos documentales -cuando los mismos no son encontrados tanto en ficheros como en sistemas informáticos- y en realizar las tareas pertinentes de conservación preventiva, conservación interventiva⁴ y estabilización en los legajos referidos para su perdurabilidad a largo plazo, lo que incluye su digitalización.

El trabajo del Archivo Histórico de la UNLP

El Archivo Histórico es el receptor de los legajos, a los que se le realizan tareas de conservación preventiva e interventiva y estabilización y, una vez terminadas estas tareas, son devueltos a las diferentes Direcciones Generales de Personal de las Unidades Académicas y Dependencias a los que pertenecen, debido a que son los encargados de la guarda del Legajo original⁵.

El personal que lleva a cabo las tareas de conservación se prepara por medio de la utilización de una máscara para nariz y boca para protección de vía respiratoria⁶, guantes descartables de látex y guantes de algodón al 100% para las manos y guardapolvo de trabajo. Asimismo, se confecciona un receptáculo en forma de caja con tres bordes y sin tapa donde se apoyan los legajos y la documentación que se va a intervenir. Esta caja tiene la finalidad de contener el polvo en suspensión y diferentes elementos metálicos, evitando su expansión. La primera tarea es la retirar elementos contaminantes tales como broches de abrochadora, broches clips metálicos mariposas de dos patas, alfileres y otros tipos de ganchos con diversos agarres al papel y cintas adhesivas. Cada foja se limpia en forma individual por anverso y reverso con pinceleta de cerda suave, desde el centro hacia fuera para eliminar el polvo, tierra y oxido de metal y de ser necesario, por la presencia de abundante polvo, se realiza limpieza mecánica con aspiradora con filtro Hepa®. Una

³ Hasta la fecha se repararon los Legajos de personal que figuran en las siguientes Resoluciones de Presidente: Resolución N° 207/15; Resolución N° 1048/15; Resolución N° 933/15 Resolución N° 1026/16

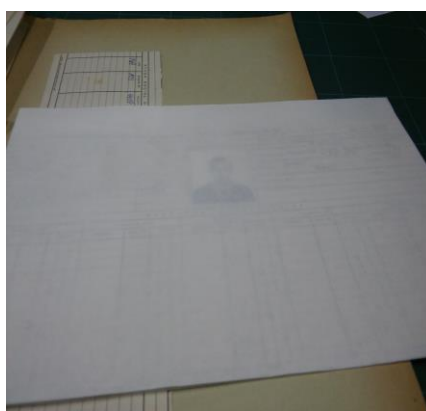
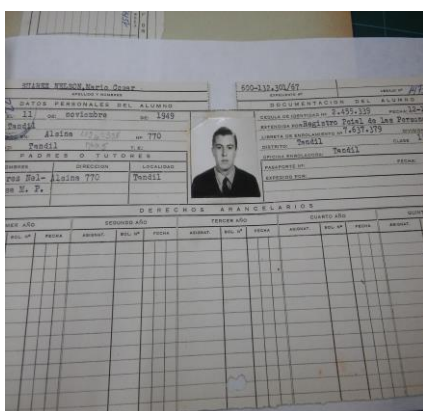
⁴ Conservación curativa o interventiva son todas aquellas acciones aplicadas de manera directa sobre un bien o un grupo de bienes culturales que tengan como objetivo detener los procesos dañinos presentes o reforzar su estructura. Estas acciones sólo se realizan cuando los bienes se encuentran en un estado de fragilidad notable o se están deteriorando a un ritmo elevado, por lo que podrían perderse en un tiempo relativamente breve. Estas acciones a veces modifican el aspecto de los bienes. (Terminología ICOM-CC. Resolución que se presentó a los miembros del ICOM-CC durante la XV. Conferencia Trienal. Nueva Delhi, 22-26 de Septiembre de 2008.)

⁵ Artículo 3° de la Resolución N° 259/15.

⁶ Respirador 3M ® 8210 N95 para Polvos y Neblinas

vez finalizada la limpieza, las fojas se depositan de una en una sobre entretela limpia. En este proceso se estiran los bordes arrugados y pliegues con plegaderas de teflón⁷ virgen. En todos los casos, los broches metálicos que sostenían las hojas y la carátula fueron retirados y se tomó la decisión de no coser los legajos con hilo blanco 100% de algodón⁸, por considerarlo innecesario, ya que se confeccionaron tanto guardas primarias como secundarias e interfoliados para contener las fojas.

Para las guardas primarias e interfoliado, considerando las diferencias de calidad del soporte de los documentos, se utilizó papel de calidad uso médico *Medical Kraft*®⁹ de 60gr. Este material de uso médico responde a requerimiento de calidad de archivo.¹⁰ Este tipo de guarda y de papel evita el deterioro físico de la documentación, la sostiene evitando que vuelva a dañarse, evita que se depositen partículas de polvo, como así también la acción de gases contaminantes del ambiente y por ser liviano y evita el aumento del volumen de los documentos de archivo. También se realizaron sobres de cuatro caras en forma de cruz para las fotografías incluidas en los legajos. Una vez que se realizan las tareas en los legajos, se confecciona una carpeta de tres solapas para guardar las fojas y así se aíslan de la carátula original que presenta un papel ácido.



⁷ Politetrafluoroetileno (PTFE)

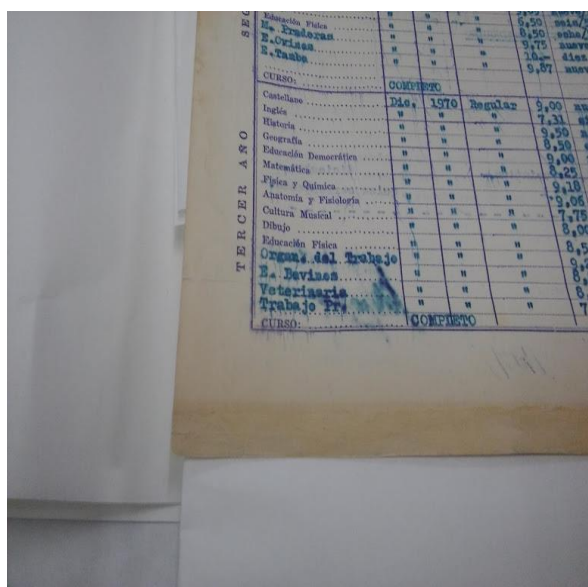
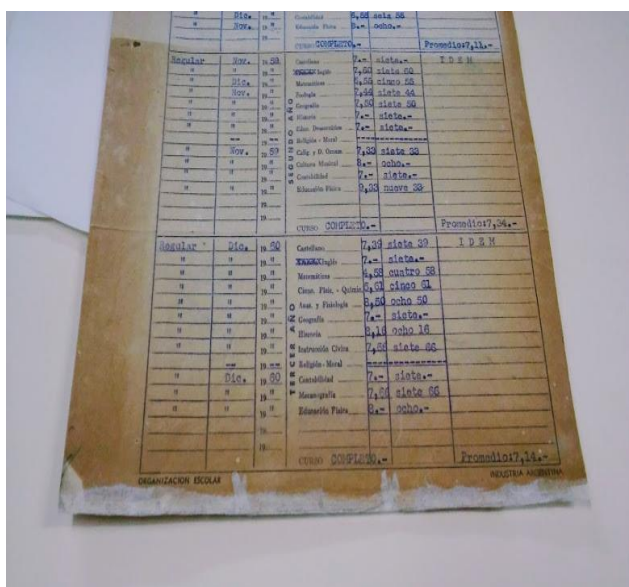
⁸ Hilo blanco 100% de algodón, marca J&P COATS®

⁹ Sobre este papel, el Archivo Histórico realizó pruebas de PH y de presencia de pasta mecánica por medio del ensayo "a la gota" con fluoroglucinol al 1% que determina la presencia de pasta mecánica en el papel tiñéndolo de violeta y el testado con tiras reactivas de pH, obteniendo resultados entre pH 7 y pH 9. Además es un papel fabricado con celulosa pura, con baja porosidad, que no posee blanqueadores ópticos y es liso, sin textura. Se puede usar para la guarda de papeles y libros como para la guarda de fotografías en diversos soportes.

¹⁰ Si bien en la Argentina no contamos con materiales con calidad de conservación, según normas ISO, se procuró utilizar insumos de calidad de archivo y tipo conservación y que hayan sido testeados.

Para las guardas secundarias se confeccionaron carpetas de tres solapas con pliegos de cartulina de papel Permatt¹¹ de 240 grs. de *Conservarte S.A.*, para colocar los legajos y así devolverlos a las diferentes dependencias a las que pertenecen.

Otras de las tareas fue la realización de reparaciones menores mediante un tratamiento denominado reintegración en las hojas que presentaban desgarros, desprendimientos, zonas friables y/o lagunas con Papel Japón (Tira de Abaca) de 16.5 gamos, adquirido en *Conservarte S.A.* y un adhesivo a base de Metilcelulosa¹², adquirido en *Conservarte S.A.* (imagen 8). También se realiza, en los casos necesarios, reintegración cromática con acuarela Winsor & Newton®.



Todo el proceso se describió y fue registrado en fichas de conservación diseñadas para tal fin y se realizó el registro fotográfico del antes, durante y final del trabajo realizado.

Proyecto Especial de reparación, digitalización y preservación de legajos de estudiantes de la UNLP víctimas del terrorismo de Estado de la FAU

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata fue una de las unidades académicas más golpeadas por el terrorismo de Estado en

¹¹ Cartulina fabricada con fibras largas de Kraft, blanqueadas, sin ácido ni lignina, con reserva alcalina.

¹² Adhesivo en polvo, libre de ácido y de efecto reversible.

relación a la cantidad de estudiantes, graduados, docentes y no docentes detenidos-desaparecidos y/o asesinados: se contabiliza un total de ciento cinco víctimas, de las cuales noventa y tres eran estudiantes.

La FAU se ha caracterizado por una temprana preocupación por vehiculizar políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Ejemplos de ello son la demolición, a fines de 1994, del muro de ingreso construido durante el período dictatorial 1966-1973; la construcción del monumento “Recuerdo, Memoria y Compromiso”, inaugurado en 1995; y la elaboración y colocación, en 2015, del *mural de la memoria*, con fotografías de cada uno de los detenidos desaparecidos y/o asesinados a causa del terrorismo de Estado y muertos en el exilio.

En este contexto, y convergiendo con políticas públicas impulsadas por el Estado Nacional (2006-2015) y la UNLP, se enmarca el Programa Permanente de Derechos Humanos de la FAU, aprobado por Resolución 83/15 del Consejo Directivo de dicha Unidad Académica con el objetivo de sostener políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación respecto del accionar del terrorismo de Estado.

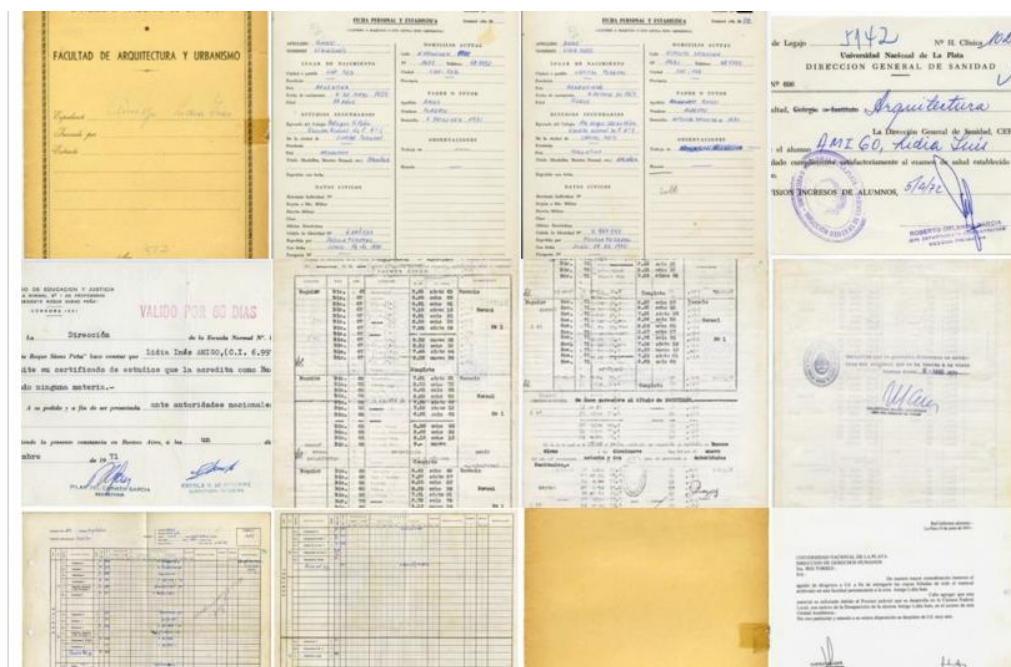
Dicho Programa confluyó, en 2016, con el “Proyecto Especial de reparación, digitalización y preservación de legajos de estudiantes de la UNLP víctimas del terrorismo de Estado”, bajo la coordinación y supervisión de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP. Su objetivo consiste en realizar actos reparatorios en legajos de estudiantes de las distintas facultades, iniciando un trabajo acorde a lo estipulado en la resolución N° 259/15 de la Presidencia de la UNLP.

Atendiendo a dichos objetivos, desde la FAU se llevan a cabo diversas actividades: I) la escritura de las biografías de estudiantes, graduados, docentes y no-docentes desaparecidos y/o asesinados a causa del terrorismo de Estado entre los años 1974 y 1983¹³; II) la digitalización de los legajos de los estudiantes y III) la creación de una colección digital. A continuación, se comentará brevemente la articulación de estas tres tareas, realizadas por un equipo interdisciplinario (Bibliotecología, Historia y Arquitectura).

La reconstrucción se lleva a cabo a partir del análisis de fuentes primarias y secundarias. En primer lugar, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las víctimas fueron estudiantiles, una de las principales fuentes primarias la constituyen

¹³ Como se afirma en la Resolución 207/16 de la Presidencia de la UNLP, “es posible afirmar que el terrorismo de Estado contra la UNLP, se inició el 8 de octubre de 1974 con el homicidio de Carlos Miguel y Rodolfo Achem a manos de miembros de grupos paraestatales”. Sólo un caso no encuadra con este criterio, dado que la víctima -Gerardo Moisés Alter- fue desaparecida en la República Oriental del Uruguay en el año 1973.

En su aspecto material, los legajos se encuentran bien preservados, dentro de biblioratos, y organizados en base a un criterio cronológico que se corresponde con el numérico. Dicha información se encuentra sistematizada en la base de datos, a la cual se accede mediante el programa SIU-Guaraní. De este modo, se facilita la ubicación, el acceso y la consulta. Los legajos consisten en una carpeta de cartón de 36 centímetros de alto por 24 de ancho, en cuya portada se indica la unidad académica y se especifica el nombre del estudiante, el año de ingreso y el número de legajo manuscrito en la parte superior del lado izquierdo. Independientemente de pequeñas variables en su contenido, todos incluyen: una hoja de ruta que indica las asignaturas cursadas y los exámenes finales aprobados; una "ficha personal y estadística", donde consta nombre y apellido, lugar de nacimiento, estudios secundarios, datos cívicos, domicilio actual y datos del padre o tutor; un original o copia del analítico de estudios secundarios, certificados de sanidad.



Fuente: Dirección de Enseñanza. Secretaría Académica. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de La Plata, 1972.

Los legajos son digitalizados para asegurar su preservación histórica y, específicamente, para alcanzar los objetivos estipulados en el Proyecto Especial¹⁴: entregar una copia digital de cada legajo al Archivo Histórico de la UNLP a los fines de realizar el acto reparatorio y la entrega de una copia impresa a familiares y/o allegados de las víctimas.

Para llevar a cabo el procesamiento digital se tienen en cuenta los estándares internacionales utilizados por la Biblioteca Nacional de España¹⁵ y por la Universidad de Cornell a través de su tutorial sobre la digitalización de imágenes¹⁶. En primer lugar, se escanean los documentos en formato TIFF manteniendo una resolución de 400 dpi y 300 dpi. En segundo lugar, mientras los archivos TIFF se conservan aparte, para la Colección Digital se convierten en JPG, tratando de reducir el peso de cada imagen a 2 Mb. Por último, se agrupan los archivos JPG en un único documento PDF por cada legajo, lo cual permite su visualización en la Colección digital.

En función de rotular sistemáticamente las unidades documentales compuestas (legajos) y sus sucesivas unidades simples (documentos), se creó un código compuesto del número de legajo de estudiante, seguido de una enumeración consecutiva numérica y subpartes con una letra en minúscula.

Como puede apreciarse, los legajos permiten obtener información fidedigna sobre datos identitarios e itinerarios académicos imprescindibles a la hora de iniciar el proceso de escritura de las biografías de los estudiantes. Estos constituyen una pieza clave que, sin embargo, no aporta otro tipo de información relacionada, por ejemplo, a las trayectorias militantes o las circunstancias de desaparición. En este sentido, una segunda fuente utilizada es el Registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado (Ruvte)¹⁷. Allí se sistematiza la siguiente información: nombre y apellido; apodos; lugar y fecha de nacimiento; lugar, fecha y circunstancias del secuestro; si la víctima fue desaparecida y/o asesinada, si continúa desaparecida o bien fueron hallados sus restos; y detalla, por último, el paso por distintos centros clandestinos de detención y dependencias militares y/o policiales, en función de los testimonios brindados en las distintas causas judiciales. En ciertos casos, los datos del Ruvte se complementan con los de bases de consulta pública disponibles en

¹⁴“Proyecto Especial de reparación, digitalización y preservación de legajos de estudiantes de la UNLP víctimas del terrorismo de Estado”, Prosecretaría de Derechos Humanos, UNLP, 2016.

¹⁵<http://www.bne.es/webdocs/Catalogos/ProcesoDigitalizacionBNE.pdf>

¹⁶<https://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-spanish/intro/intro-08.html>

¹⁷Listado de víctimas de desaparición forzada y de asesinato del accionar represivo ilegal del Estado argentino entre los años 1966 y 1983 elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2015).

Internet sobre víctimas del terrorismo de Estado¹⁸.

Aun así, las fuentes descriptas no aluden a las trayectorias vitales de los sujetos en sus experiencias afectivas, ideológicas, militantes o de participación colectiva, dimensiones presentes en la bibliografía histórica y periodística consultada¹⁹ y en materiales disponibles en Internet que actualizan datos sobre homenajes realizados por familiares u organizaciones, hallazgos de los restos de las víctimas, juicios y estado de las causas judiciales.

Según se ha comentado hasta aquí, tanto las biografías como los legajos digitalizados se encuentran albergados en la colección digital "Víctimas del terrorismo de Estado de la FAU". El objetivo es que la misma contenga las ciento cinco biografías -incluyéndose las de docentes y no docentes- y cerca de ochenta legajos digitalizados de estudiantes y graduados²⁰ desaparecidos y/o asesinados a causa del terrorismo de Estado en el período 1974-1983.

La Colección digital fue concebida teniendo en cuenta criterios de archivística, documentación y bibliotecología. Para el registro documental de los datos y tratamiento de las imágenes se optó por el programa OMEKA²¹, utilizado por distintos tipos de museos y archivos en el ámbito tanto nacional como internacional, creado por el Roy Rosenzweig Center for History and New Media²².

Dicho programa permite organizar colecciones de orden temático, registrar datos a través del formato internacional de metadatos Dublin Core y añadir nuevos por cada tipo de elemento (textos, imágenes, historias orales, sonidos, sitios web, planos, eventos, hipervínculos, e-mails, recursos interactivos, data sets, personas, servicios, softwares). Tiene, también, capacidad para gestionar y almacenar distintos tipos de archivos (pdf, .ppt, .doc, .xml, .html, .mp3, .mp4, .divx, .gif, .tif, .jpeg), interoperabilidad de metadatos con otros sistemas a través del protocolo OAI y,

¹⁸ Tales como: Parque de la Memoria, Ciudad de Buenos Aires [disponible en: <http://parquedelamemoria.org.ar/>], Nómina de desaparecidos y asesinados de la UNLP [disponible en: <http://hosting2.unlp.edu.ar/derechoshumanos/>], Baschetti, Roberto "Militantes del peronismo revolucionario uno por uno" [disponible en: <http://www.robertobaschetti.com/>].

¹⁹ Ejemplos de ello son las siguientes obras: Mattini, Luis (1996): *Hombres y mujeres del PRT-ERP. De Tucumán a La Tablada*; Hendler, Ariel (2010): *La guerrilla invisible. Historia de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL)*; Cecchini, Daniel y Elizalde Leal, Alberto (2016): *La CNU. El terrorismo de Estado antes del golpe*; Gómez, Claudio (2015): *Maten a, rugbier. La historia detrás de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club*; Piccone, María Verónica (ed.) (2010): *Huellas. Semblanzas de vida de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado pertenecientes a la UNLP*, Edulp.

²⁰ Aún no han sido relevados en su totalidad.

²¹ <https://omeka.org/>

²² <https://rrchnm.org/>

además, permite elegir el tipo de acceso -público o privado- de los registros o documentos.

Se creó un registro donde se realizó una descripción meramente archivística sobre cada legajo de alumno y/o graduado -unidad documental compuesta- (ver figura 1), a través de una adaptación de las normas archivísticas ISAD (G) al formato de metadatos Dublin Core. En dicho mapeo se establece una concordancia entre las distintas reglas de las ISAD (G) al formato extendido de DC:

DC	ISAD (G)
dc.type	3.1.4 Niveles de descripción
dc.identifier	3.1.1 Reference Code
dc.title	3.1. 2 Título
dc.date	Fecha
dc.creator	3.2.1 Productor
dc.format	3.1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción
dc.description	3.2.1 Historial Institucional – Historia archivística – Forma de ingreso
dc.coverage	3.3.1 Alcance y contenido
dc.right	3.4.1 Condiciones de acceso
dc.language	3.4.3 Lengua/escrituras doc
dc.relation (IsPartOf)	3.5.3 Unidad de descripción relacionadas

Mapeo Dublin Core a ISAD (G)

69

Figura 1: Metadatos Dublin Core

Identificador

5142/9

Tipo

Unidad Documental Compuesta

Idioma

SPA

Título

Lidia Inés Amigo Leston

Autor

Dirección de Enseñanza. Secretaría Académica. Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional de La Plata.

Descripción

Legajo del alumna Lidia Inés Amigo Leston (Leg.5142/9) incluido dentro de la Serie Legajos de Alumnos, creados por la sub-sección de Dirección de Enseñanza de la sección de la Secretaría Académica pertenecientes al Fondo Documental de la FAU.

Formato

1 Legajo

Cobertura

El legajo contiene: Portada - Ficha personal y estadística del alumno – Certificado de Sanidad – Constancia total de materias aprobadas del secundario – Analítico final del secundario – Analítico de materia aprobadas de la carrera

Derechos

Acceso restringido. Protección de datos sensibles y/o judicializables según Ord. 280/10 UNLP - Ley 25.326.

Materia

Desaparecidos
Terrorismo de estado

Fuente: Colección “Víctimas del terrorismo de Estado de la FAU”. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de La Plata, 2017.

Se realizó otra descripción por el tipo de elemento "Persona" a través de los campos ofrecidos por el programa OMEKA, a los cuales se les agregó los solicitados en el "Proyecto Especial de reparación, digitalización y preservación de legajos de estudiantes de la UNLP víctimas del terrorismo de Estado" (ver figura 2).

Figura 2: Metadatos por tipo de elemento "Persona"

Fecha de nacimiento

4 de mayo de 1954

Lugar de nacimiento

Buenos Aires

Condición

Estudiante

Fecha de desaparición

21 de diciembre de 1976

Lugar de detención

Centro Clandestino de detención La Cacha

Estado

Restos hallados (2009)

Biografía

El 4 de mayo de 1954, en la ciudad de Buenos Aires, nacia Lidia Inés Amigo Leston. Más conocida como Inés. En Buenos Aires transcurrió su infancia y adolescencia: estudió en la Escuela Normal N° 1 de Profesoras de la Capital Federal, obteniendo el título de Bachiller. Su confidente era su hermana Silvia, apenas dieciséis meses menor. A las dos les gustaba la música.

En 1972, Inés se mudó a La Plata para iniciar sus estudios en la Facultad de Arquitectura y urbanismo. Mientras cursaba la carrera, conoció a quien sería su novio, Oscar Ragni. Ambos compartían la militancia en el Centro de Estudiantes de la facultad y la Juventud Universitaria Peronista.

En la universidad, Inés llegó a cursar cuarto año. La mañana del 21 de diciembre de 1976, caminaba por el predio de la Facultad para entrar a rendir un examen cuando, a la vista de otros estudiantes, fue secuestrada. Tenía 22 años. Al día siguiente, su novio Oscar, fue secuestrado en Neuquén.

Tras el secuestro de Inés, su padre, Alberto Amigo, que había sido Subsecretario de Agricultura antes del golpe de estado, le pidió ayuda al subsecretario en funciones, Jorge Zorreguieta. Pero no hubo ayuda alguna. Zorreguieta debió declarar en el año 2001 en el marco de los Juicios por la Verdad y de este modo el caso tomó cierta trascendencia mediática, pues Zorreguieta debió ausentarse de la boda de su hija Máxima. Sin embargo, en su testimonio volvió a desvincularse, aduciendo que el padre de Lidia sólo le había informado del secuestro de su hija, pero no pedido que hiciera gestiones por la joven.

Según supo su hermana, Inés habría estado secuestrada en el Centro Clandestino de detención La Cacha.

A fines del 2009, su cuerpo fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en una tumba colectiva de NN del Cementerio de Avellaneda. El 21 de Septiembre

Fuentes

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado. Anexos I, II, III, IV y V.

Monumentos a las víctimas del terrorismo de estado. Parque de la Memoria. Bashe de datos de consulta pública, Recuperado de: <http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/>

Militantes del peronismo revolucionario uno por uno. Roberto Baschetti. Recuperado de: <http://www.robertobaschetti.com/uno%20x%20uno.htm>

Documentos



Colección

Reparación Histórica Legales

Citación

Dirección de Enseñanza. Secretaría Académica. Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional de La Plata., "Lidia Inés Amigo Leston," *Fondo Histórico FAU*, consulta 19 de marzo de 2017. <http://baschetti.com/uno%20x%20uno.htm>

Fuente: Colección "Víctimas del terrorismo de Estado de la FAU". Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de La Plata, 2017.

En la segunda instancia se creó un registro con la finalidad de procesar tanto las imágenes escaneadas como los archivos PDF y para establecer su relación con respecto al primero. Sólo se cargó el metadato dc.title y dc.identifier para poder identificarlo (ver figura 3). El acceso a este registro es restringido para evitar la publicación de los datos sensibles y judicializables de los estudiantes y/o graduados involucrados, en concordancia con lo estipulado por la Ordenanza 280/10 de la UNLP y por la Ley Nacional 25.326.

Figura 3: registro hijo

Dublin Core

Identificador
5142/9

Título
[Legajo Lidia Inés Amigo Leston](#)

Documentos



Fuente: Colección “Víctimas del terrorismo de Estado de la FAU”. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de La Plata, 2017.

La relación entre los registros se establece a través de la opción de “Ítems relacionados” que ofrece OMEKA, a través de los metadatos dc.relation_Has part y dc.relation_Is Part of.

La experiencia de la FAU constituye un ejemplo de los aportes que institucionalmente pueden realizarse a la memoria colectiva. La digitalización de los legajos de las víctimas estudiantiles del terrorismo de Estado y la creación de una

colección digital que alberga estos documentos junto con las biografías, forma parte de las tareas de reparación documental impulsadas por el Archivo Histórico de la UNLP y, al mismo tiempo, constituye un vehículo clave para la difusión de nuestro pasado reciente.

Consideraciones generales

En general, los Legajos se encuentran en un buen estado de conservación y, en un 70% de los casos que hasta ahora se conservaron, solamente se realizó una estabilización por medio de la limpieza mecánica superficial y la confección de las guardas primarias y secundarias y, en los casos necesarios, se realizaron reparaciones menores.

Por medio de las acciones que se describieron anteriormente en el presente trabajo, llevadas a cabo por el Archivo Histórico sobre los Legajos, se trata de evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas de la documentación, como así también la obligación de la Universidad -por actuar como institución victimaria a partir de la intervención, incluso previa al golpe de estado a través de la denominada "Misión Ivanissevich"-, de la reparación histórica del daño accionado a la comunidad universitaria que fuera víctima de secuestros, desaparición, homicidios, expulsión y exilio.

En este sentido ha sido fundante, también, el reposicionamiento de la UNLP, en cuyo Estatuto vigente se "reafirma su compromiso con los valores democráticos y republicanos y por ello sostiene que no podrán incorporarse y/o permanecer en ella, en cualquier desempeño, aquellas personas involucradas en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de estado"²³. Dicho compromiso, se ha materializado en una variedad de acciones, además de las descriptas previamente, incluyendo su participación como querellante en los juicios contra el terrorismo de Estado y en la labor de identificación de integrantes de la comunidad universitaria que fueron víctimas de la violencia estatal.

En el caso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la experiencia de escritura de biografías de estudiantes, graduados, docentes y no docentes detenidos desaparecidos y/o asesinados por el terrorismo de estado; la digitalización de los legajos de las víctimas estudiantiles y la creación de una Colección digital que albergue estos documentos, constituye una iniciativa que, siendo parte del vigente Programa Permanente por los Derechos Humanos de la FAU, se inserta en un proceso institucional más abarcativo, relacionado con la motorización de políticas de

²³ Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata (2008), p. 4.

Memoria, Verdad y Justicia.

Es una obligación y responsabilidad ética, entonces, continuar con el fortalecimiento de las acciones que permitan que los familiares de quienes fueron víctimas del genocidio tengan una reparación del daño sufrido y que se deje constancia de los verdaderos motivos del cese de las funciones y los cargos. Es una tarea conjunta de todas las Unidades Académicas, las instituciones de pre-grado, las comisiones de Derechos Humanos, los gremios de docentes y trabajadores, las agrupaciones estudiantiles, la Dirección General de Personal y el Archivo Histórico de la UNLP.

Bibliografía

Baschetti, Roberto: Militantes del peronismo revolucionario uno por uno. Recuperado de: <http://www.robertobaschetti.com/uno%20x%20uno.htm>

Bergaglio, Carolina y Pené, Mónica, comp. 2009. Recomendaciones básicas para la conservación de documentos y libros. En: *Conservación preventiva en los Archivos*, pp 125-163. [En línea]. Disponible en <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.295/pm.295.pdf>

Borrego Alonso, S. Dorta Valdés, M, Perez Lara, A. y Mirabal Villason, M. 2009. *Gestión de riesgos para la prevención y mitigación de desastres en el patrimonio documental*. Santo Domingo.

Carranza, Martín (2010). "Arquitectura, movimiento estudiantil y los espacios de la UNLP (1968-73)". Ponencia presentada en III Jornadas de Estudio y Reflexión sobre el Movimiento Estudiantil Argentino y Latinoamericano, La Plata:16, 17 y 18 de septiembre de 2010.

Cecchini, Daniel y Elizalde Leal, Alberto (2016): La CNU. El terrorismo de Estado antes del golpe. La Plata: Dos perros ediciones.

CONSERVAPLAN 7, Fascículos 1-6 Caracas: EX LIBRIS, 1995. [En línea]. Disponible en <http://www.bnv.gob.ve/conservaplan>

Cruz Mundet, José R. (ed.) 2003. *Archivos universitarios e historia de las universidades*, Madrid, Universidad Carlos III/Dykinson,

Cruz Mundet, José R., 1994. *Manual de Archivística*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez/Pirámide.

Csillag, I. 2000. *Conservación de fotografía patrimonial*. Santiago de Chile: Centro Nacional de Conservación y Restauración, DIBAM.

Daleo, O., Casaretto, S., Cabrera, M. y Pico, A. (comp.) (2014) *Filo en rompecabezas, búsqueda colectiva de la memoria histórica institucional (1966-1983)*. CABA: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.

Decreto 1172/03: Acceso a la información Pública. Poder Ejecutivo Nacional; ([En línea]. Disponible en <http://www.mec.gov.ar/concursos/biblio/DTO%201172-03.pdf>.

Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata (2008).

Gil García, Pilar, coordinadora. 2002. *Tipología documental de universidades: propuesta de identificación y valoración*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. [En línea]. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet>.

Gómez, Claudio (2015): *Maten al rugbier. La historia detrás de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club*. Buenos Aires: Sudamericana.

Hendler, Ariel (2010): *La guerrilla invisible. Historia de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL)*. Buenos Aires: Javier Vergara Editor.
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm>

http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/ordenanza_n_280.pdf

Ley 25.326 "Protección de datos personales" (2000). Presidencia de la Nación. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Infoleg. Recuperado de:

Ley Nacional Nº 25.326: Protección de los datos personales. ([En línea]. Disponible en http://www.oas.org/juridico/PDFs/arg_ley25326.pdf)

Mattini, Luis (1990): *Hombres y mujeres del PRT-ERP. De Tucumán a La Tablada*. Buenos Aires: Contrapunto.

Monumentos a las víctimas del terrorismo de estado. Parque de la Memoria. Base de datos de consulta pública, Recuperado de: <http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/>

Mujica, P. 2002. *Conservación preventiva para archivos*. Santiago de Chile: Centro Nacional de Conservación y Restauración, DIBAM.

Nómina de desaparecidos y asesinados de la UNLP. Recuperado de: <http://hosting2.unlp.edu.ar/derechoshumanos/>

Ogden, Sh. 2000. *El Manual de Preservación de Bibliotecas y Archivos del Northeast Document Conservation Center*. Santiago de Chile: Centro Nacional de Conservación y Restauración, DIBAM.

Ordenanza 280. "Derecho de Acceso a la Información" (2010). La Plata: Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata.

Piccone, María Verónica (Ed.) (2010). *Huellas. Semblanzas de vida de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado pertenecientes a la UNLP*. La Plata: Edulp.

Planck González Rubio, Mariana. 2009. ¿Qué papeles utilizar para mis fotografías? En *Cuadernos del Sistema Nacional de Fototecas*, 13, Instituto Nacional de Antropología e Historia. México, DF.

Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP (2016). "Proyecto Especial de reparación, digitalización y preservación de legajos de estudiantes de la UNLP víctimas del terrorismo de Estado". Recuperado de: <https://procesosconstructivos.files.wordpress.com/2012/06/historia-de-la-fau.pdf>

Resoluciones: 259/15 y 207/16 de la Presidencia de la UNLP y 83/15 del Consejo Directivo de la FAU.

Rodríguez Moreno, María Cecilia. 2013. *Guía de Conservación preventiva para documentos de archivo. Serie protocolar de trabajos y mejores prácticas para gestión de archivos*, N° 2. Santiago de Chile: Centro Nacional de Conservación y Restauración, DIBAM. [En línea]. Disponible en http://www.dibam.cl/Recursos/Contenidos/Archivo%20Nacional/archivos/guia_conservacion.pdf

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado. Anexos I, II, III, IV y V.

Terminología ICOM-CC. Resolución que se presentó a los miembros del ICOM-CC durante la XV. Conferencia Triannual. Nueva Delhi, 22-26 de Septiembre de 2008. [En línea]. Disponible en <http://www.icom-cc.org/54/document/icom-cc-resolucion-terminologia-espanol>.

Organización de las obras planas de la DGCyM de la UNLP. Necesidad del abordaje archivístico para garantizar su accesibilidad

Organization of the plans of the DGCyM of the UNLP. The need for an archival approach
to ensure accessibility

Recibido: 03/07/2017 – Aceptado: 11/07/2017

Ivana Farella*

ivafarella@gmail.com

Mariela Amor**

marielamor@yahoo.com

Resumen: La Dirección General de Construcciones y Mantenimiento (DGCyM) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) guarda en su depósito gran cantidad de planos de diversa procedencia, formatos, tamaños y soportes. En ellos se registran gráficamente los edificios históricos patrimoniales de la UNLP desde su origen como Universidad Provincial (1897-1905) hasta su constitución como Universidad Nacional (1905-actualidad). Al concebir los planos como parte del patrimonio documental de la UNLP, de la memoria y la identidad institucional, se dio inicio en 2014 a un proyecto de reorganización de los mismos, conjuntamente entre la DGCyM y el Archivo Histórico de la UNLP. Se llevó a cabo un trabajo interdisciplinario y colectivo que consiste en la organización y acondicionamiento de los documentos (siguiendo los principios de conservación preventiva) y su procesamiento, a fin de poder facilitar su accesibilidad.

Palabras clave: procesamiento archivístico - UNLP - planos- conservación- accesibilidad.

Abstract: The General Directorate of Construction and Maintenance (DGCyM) of the National University of La Plata (UNLP) keeps in its warehouse a large number of plans of diverse origin, formats, sizes and hardware. They graphically record the historical heritage buildings of the UNLP from its origin as Provincial University (1897-1905) until its constitution as National University (1905-present). In designing the plans as part of the documentary heritage of the UNLP, of the memory and the institutional identity, in 2014 a project of reorganization of the same was initiated, jointly between the DGCyM

* Técnica en Administración de documentos y archivos (Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 8, La Plata). Integrante del proyecto "Servicio de Preservación y Conservación de la documentación escrita y fotográfica del Archivo General de la Nación (AGN- 2015). Parte del equipo de trabajo del Archivo Histórico de la UNLP.

** Arquitecta (FAU-UNLP). Coordinadora de proyectos en la Dirección General de Construcciones y Mantenimiento de la UNLP. Museóloga. Integrante de la Comisión Directiva de ICOM – Argentina

and the Historical Archive of the UNLP. An interdisciplinary and collective work was carried out, consisting in the organization and conditioning of documents (following the principles of preventive conservation) and their processing, in order to facilitate their accessibility.

Keywords: archival processing - UNLP - plans - conservation - accessibility.

Introducción

Aurelio Tanodi (1961) define a los planos como “la presentación gráfica en una superficie plana, de un terreno, de construcciones humanas, etc.; se relacionan con las actividades del hombre sobre las superficies espaciales, y generalmente abarcan sectores más pequeños que los mapas. Los planos se asemejan a los croquis...”. Podemos sumar a esta definición que los planos representan gráficamente la obra de arquitectura, sus medidas, usos, funcionalidad, medios y materiales de construcción. Además, testimonian las necesidades, maneras de pensar, de vivir y concebir la arquitectura a través del tiempo.

En la Dirección General de Construcciones y Mantenimiento (DGCyM) de la Universidad Nacional de La Plata se guardan planos de diversa procedencia, formatos, tamaños y soportes. En ellos se registran los edificios históricos patrimoniales de la UNLP desde su origen como Universidad Provincial (1897-1905) hasta su constitución como Universidad Nacional (1905-actualidad).

Este acervo documental en soporte papel está compuesto por planos que se encuentran formando parte de expedientes de licitaciones o pliegos licitatorios, planos enrollados y una colección de planos históricos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Los planos producidos o recibidos por la Universidad Nacional de La Plata en el transcurso de su historia son conservados ya sea por una necesidad administrativa de registro o información, así como por ser fuentes factibles para la investigación histórica, formando parte del patrimonio documental de la UNLP. Además, dan testimonio acerca de las especificidades de sus soportes, de los procedimientos y técnicas utilizadas en el dibujo, del proceso de elaboración y copiado a través del tiempo, y por ser antecedentes para el mantenimiento, remodelación edilicia y obras en la actualidad. Por lo tanto, se planteó la necesidad e importancia de poner en marcha un proyecto de revalorización de los mismos, conjuntamente entre la DGCyM y el Archivo Histórico de la UNLP, llevándose a cabo un trabajo interdisciplinario y colectivo entre archivistas, arquitecta-museóloga, museóloga-conservadora y voluntarios de la comunidad. Este artículo va a describir este proyecto y los objetivos logrados y metas por alcanzar.

Los planos en el contexto histórico de la UNLP

El 19 de noviembre de 1882 se fundaba la ciudad de La Plata como la nueva capital de la provincia de Buenos Aires. La misma se constituiría como un centro político,

administrativo y económico, como así también en un importante foco cultural. En este marco se propugnó, en la Legislatura bonaerense en 1889 y por petición de los senadores Rafael Hernández, Emilio J. Carranza, Marcelino Aravena, y Valentín Fernández Blanco, un proyecto de ley de creación de una Casa de Altos Estudios en La Plata a fin de dotar de una formación científica, cultural y técnica a la naciente ciudad. El 2 de enero de 1890 el Gobernador Máximo Paz promulgó la Ley N° 233 que daría origen a la Universidad Provincial, aunque recién el 18 de abril de 1897 se inauguraría esta Casa de Estudios, siendo su primer rector el Dr. Dardo Rocha. En esos tiempos la Universidad se componía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Medicina, Facultad de Química y Farmacia, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas con su Instituto de Física– a partir de 1956, este Instituto pasará a denominarse Departamento de Física hasta su incorporación a la Facultad de Ciencias Exactas en 1968–, la Escuela Práctica de Agricultura, ubicada en el establecimiento Santa Catalina (Lomas de Zamora) y la Biblioteca Pública –creada en 1887.

La falta de apoyo económico y de alumnos hizo que la Casa de Estudios fuera perdiendo vigor. Ante este panorama, el ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, Dr. Joaquín V. González, impulsó la creación de una Universidad Nacional –sobre la base de la provincial y de otros institutos de instrucción superior ya existentes– otorgándole a la UNLP un carácter científico y experimental afín con el espíritu empírico y positivista de su tiempo. Así, el 12 de agosto de 1905, por convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo de la Nación y el de la provincia de Buenos Aires aprobado por Ley Nacional N° 4699 del 25 de septiembre de 1905, se daba origen a la Universidad Nacional de La Plata.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires cedió al de la Nación el Museo de La Plata y la Escuela de Química y Farmacia que allí funcionaba, la Facultad de Agronomía y Veterinaria y el Establecimiento Santa Catalina, la Facultad de Derecho con sus secciones de Pedagogía y de Filosofía, el Observatorio Astronómico, la Biblioteca Pública, el uso del edificio del Banco Hipotecario de la Provincia situado entre las calles 6, 7, 47 y 48, y todos los bienes que constituyen el patrimonio de la Universidad de La Plata. Con estas instituciones la Nación creó un instituto universitario, bajo la dependencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, al que denominó Universidad Nacional de La Plata.

La UNLP, constituida como persona jurídica, comenzó a funcionar con un Presidente, un Consejo Superior, una Asamblea de Profesores y un Consejo Académico, presidido por una autoridad del Museo, del Observatorio Astronómico, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. La Presidencia de la Universidad tenía por funciones representar a la misma en todos sus actos civiles, administrativos y académicos y presidir las Asambleas Generales y el Consejo Superior.

El 17 de marzo de 1906 asumía como primer Presidente de la historia de la Universidad Nacional de La Plata el Dr. Joaquín V. González (quien ocuparía dicho cargo hasta 1918). Con la incorporación de varios institutos y la creación de nuevas Escuelas Superiores y Facultades, la Universidad Nacional de La Plata inició un crecimiento sostenido y fue adquiriendo su jerarquía tanto a nivel nacional como internacional.

Hacia 1910, la Universidad ya en pleno funcionamiento, dotada de presupuesto, planes de estudio y planta funcional directiva, administrativa y docente, se componía de: la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la que dependían las Secciones de Pedagogía y Filosofía, Historia y Letras (actualmente Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación), Facultad de Agronomía y Veterinaria, que tenía a su cargo la Escuela de Agricultura y Ganadería de Santa Catalina (actualmente Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales respectivamente), Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas, Instituto del Museo-Facultad de Ciencias Naturales, que comprendía las Escuelas de Geología, Biología, Antropología, Geografía, Química y Dibujo, Departamento de Estudios Secundarios y Primarios, integrado por el Colegio Nacional –internado y externado–, el Colegio Secundario de Señoritas (actualmente Liceo “Víctor Mercante”) y la Escuela Anexa (actualmente Escuela Graduada “Joaquín V. González”), el Observatorio Astronómico y la Biblioteca Pública.

Descripción general de este acervo documental

Los documentos conservados en el archivo de la DGCyM, en términos generales, corresponden a la documentación gráfica y escrita producida en base a las funciones y actividades de la Dirección de Proyectos y de la Dirección de Obras dependientes de la Dirección General de Construcciones y Mantenimiento. Así, encontramos un acervo documental compuesto por planos, memorias técnico descriptivas, pliegos de licitación, planillas y documentos relacionados, proyectos y obras realizados en el ámbito de la UNLP. Esto constituye el mayor porcentaje de la documentación obrante en el depósito de la DGCyM. Asimismo, se guardan las carpetas de colección de planos históricos (soporte papel, aproximadamente hasta mediados de la década de 1940) correspondientes a los principales edificios fundacionales, realizados por los departamentos técnicos del antiguo Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires y que forman parte del patrimonio documental de la Universidad Nacional de La Plata desde su creación.

En soporte digital se conserva la Colección de planos históricos del MOP (planos correspondientes a edificios pertenecientes a la UNLP que estaban archivados en el Ministerio de Economía de la Nación y fueron digitalizados por el Centro de Documentación e Información de la Arquitectura Pública²). Esta colección de planos digitalizados fue obtenida por convenio entre la UNLP y mencionado Centro.

A partir del año 2000 se archiva también en formato digital toda la producción de planos y documentación gráfica de la Dirección de Proyectos de la DGCyM, realizados a través de los programas de diseño asistido por computadora (ACAD) para la gestión de obras y proyectos de la Universidad.

²El Cediap depende del Ministerio de Economía de la Nación. Para más información al respecto, se recomienda visitar el sitio web oficial del centro: <http://cdi.mecon.gov.ar/>

Con respecto al volumen documental, hasta el momento se registraron:

- Planos en expedientes de licitación o pliegos licitatorios: 112 cajas de archivo.
- Rollos de planos, proyectos y obras, cantidad aproximada: 2500 unidades documentales simples.
- Planos de la colección del MOP: 50 cajas de archivo.

En cuanto a la procedencia documental de este acervo se puede mencionar entonces que se cuenta con:

- a) Planos producidos por las oficinas técnicas de proyectos y obras de la UNLP.
- b) Colección de planos históricos del MOP (en soporte papel): Dirección General de Arquitectura. Ministerio de Obras Públicas. Dependiente de la Provincia de Buenos Aires (aprox. hasta mediados de la década de 1940).
- c) Colección de planos históricos del MOP (en soporte digital) incorporados al archivo de la DGCM y Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios en 1997.



Planos en expedientes de licitación o pliegos licitatorios



Planos enrollados, obras y proyectos



Planos de la colección MOP

De acuerdo a los datos que se pudieron verificar a través de las oficinas encargadas de los proyectos y obras de la Universidad, la documentación tuvo en los primeros tiempos diversas localizaciones físicas: Facultad de Arquitectura, inmueble alquilado y otras dependencias hasta ubicarse en la Facultad de Ingeniería. Desde entonces hasta la actualidad, se registraron al menos cuatro mudanzas:

1. Ubicación: Facultad de Ingeniería. Departamento de Hidráulica. (Circa 1968/73).

2. Ubicación: Edificio de Odontología (diagonal Reforma Universitaria entre 50 y 115) DGCM se muda al Edificio del Ex Liceo, actual Ciencias Exactas (circa 1994).
3. Ubicación: Edificio Ex Liceo (actual Laboratorio CINDEFI de la Facultad de Ciencias Exactas, calle 50 y 115). La DGCM se muda a la planta alta del edificio de calle 51 (8 y 9) (Ex edificio de Sanidad UNLP) (año 2001).
4. Ubicación actual: planta alta del edificio de calle 51 (8 y 9) (Ex edificio de Sanidad UNLP) calle 51.

En la actualidad se está proyectando otra mudanza y la transferencia de la custodia de la documentación al Archivo Histórico de la UNLP.

Los planos y sus soportes

Desde el punto de vista de las especificidades de los soportes de los planos existentes en la DGCyM, tenemos los comúnmente denominados "planos azules" (dibujo blanco sobre fondo azul oscuro) que son copias al ferropusado o *cianotipos*. Presentan una imagen en negativo como resultado de la exposición durante varias horas a la luz ultravioleta de un papel industrial impregnado por una de sus caras con una emulsión sensible a la luz (compuesta de sales férricas y ferrocianuro de potasio), situado bajo un original dibujado en tela de calcar. Las áreas expuestas se transforman en sales ferrosas de tono azul de Prusia, insolubles en agua. Las líneas del dibujo, no expuestas a la luz, siguen siendo solubles y se eliminan con un sencillo lavado en agua dando como resultado las líneas blancas del dibujo. En la UNLP, estos soportes se utilizaron aproximadamente en la década de 1920 hasta principios de los años 30. Posteriormente se utilizaron copias heliográficas en papel *diazotipo* (dibujo en cian o magenta y fondo blanco) que es un sistema de reproducción monocromático que da una imagen en positivo de tono sepia. Consisten en un papel industrial con una emulsión de un compuesto diazótico y un activador que es sensible a la luz ultravioleta. Se realizaban por medio de la exposición de un original en soporte semitransparente sobre papel diazotípico a la luz solar. El "revelado" se hacía con vapores de amoníaco. Estas copias se obtenían de originales en papel transparente, vegetal o poliéster sobre papel preparado para ser velado con los vapores de mercurio de la máquina de copias heliográficas. Con este sistema también se obtenían las llamadas *copiativas*, es decir, copias de papel vegetal a papel vegetal. Las copiativas servían de plano base para completar con lapiceras estilográficas (o rapidógrafos) de dibujo técnico, el dibujo de las instalaciones y detalles complementarios de la arquitectura sobre el plano arquitectónico base. Posteriormente, de esas copias con dibujos de instalaciones agregados, se podían obtener copias heliográficas en papel opaco (*diazotipo*). También se utilizaron telas con apresto y planos entelados, pero en el archivo de la

DGCyM se presentan en muy escasa proporción. Cada uno de estos soportes tiene características particulares para su conservación.

Los planos "originales" dibujados a mano sobre papel vegetal o papel sulfurizado servían para realizar los tipos de copias anteriormente citados. Estos papeles de alta calidad compuestos por fibras vegetales no leñosas como el algodón, se obtienen industrialmente sometiéndolos a baños controlados de ácido sulfúrico para transformar químicamente su estructura y otorgarles transparencia, impermeabilidad y resistencia física. Son papeles delicados, rígidos y quebradizos. Este tipo de papeles prácticamente se dejaron de usar en la DGCM aproximadamente en el año 2000, cuando se implementó el dibujo asistido por computadoras (ACAD) para el dibujo de planos de arquitectura, instalaciones y estructuras con copias en papel blanco (opaco) a través de impresoras y plotters a tinta. En la actualidad ya no se realizan copias ni planos en papel vegetal. Se utilizan archivos en formato digital, guardados en un servidor. Se imprimen, con plotter, planos en papel opaco y copias papel.



82

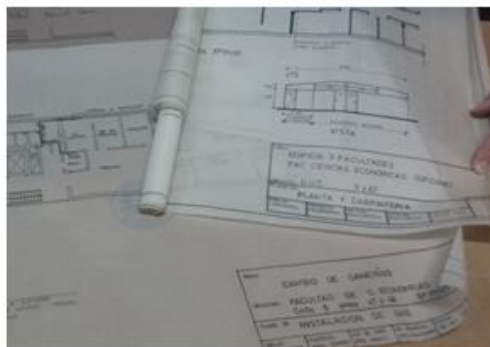
Copias al Ferropusciato o CIANOTIPOS



Papel DIAZOTIPO –Copias Heliográficas



Planos entelados



Planos en papel vegetal



Planos en papel encerado



Planos en papel poliéster

Tareas para la revalorización de los planos como patrimonio documental de la Universidad

Cuando el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata se contactó con la Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, la documentación no se encontraba acondicionada con los requisitos básicos que se necesitan para que sus condiciones de guarda sean óptimas ni para garantizar el acceso a este acervo tanto por usuarios internos como externos a la Universidad. Por otro lado, el depósito donde se encuentra guardada la documentación presenta una superficie de 14m² y está ubicado en la planta alta de la dependencia. Su acondicionamiento no es óptimo para la guarda documental, pues no se le hacen controles de temperatura y humedad, no tiene estanterías adecuadas, y es un espacio muy reducido para la cantidad de planos que se encuentran allí, como se observa en las fotografías. Recordemos también que muchas de estas obras planas forman parte de expedientes, documentos en los que el deterioro

por ganchos o elementos metálicos y la transmisión de acidez por las tintas o por los propios papeles contiguos agravan las condiciones de conservación. Asimismo, este espacio se utiliza también como depósito de materiales de oficina, de elementos informáticos y de artículos de limpieza.

Por todo lo expuesto anteriormente, es razón suficiente para haber comenzado con la planificación de actividades de manera interdisciplinaria y colectiva, desde el año 2014 hasta la actualidad, que consisten en la organización (clasificación y ordenación), acondicionamiento (estabilización) y procesamiento (registro) óptimos de la documentación, teniendo como finalidad principal su accesibilidad. Como primera tarea, personal especializado en archivística comenzó recabando la historia archivística de este acervo de planos, así como la historia de la DGCyM. Se continuó pensando una clasificación posible para esta documentación que fue, más allá de las series (como pueden ser planos de arquitectura, planos de instalación sanitaria, planos de instalación eléctrica, planos de remodelaciones) estructurarla en base a los grupos edificios definidos por la propia Universidad, que permiten entender mejor las obras planas. Estos son: Grupo Bosque Norte, Grupo Bosques Este, Grupo Bosque Oeste, Grupo Urbano Centro³.

Las actividades y tareas llevadas a cabo hasta el día de la fecha, con voluntarios de la comunidad, son:

- Limpieza superficial de los documentos y tareas de conservación
- Limpieza general del depósito
- Nueva rotulación de las cajas de archivo
- Registro en inventario normalizado con ISAD(G)

Asimismo, y como se requiere de presupuesto para poder continuar con esta tarea, nos hemos presentado en la XIX Convocatoria Iberarchivos-Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos (ADAI) con un trabajo titulado: "Recuperación y puesta en valor de planos históricos de la Dirección General de Construcciones y Mantenimiento de la Universidad Nacional de La Plata como patrimonio documental de la Universidad: clasificación, ordenación y conservación para su difusión (1920-2000)". Este trabajo se propone 1) la organización de dicha documentación, que incluye su clasificación, ordenación y conservación preventiva (depósito y unidades de conservación adecuadas). 2)

El registro y la descripción de dicha documentación a través de los instrumentos y normas de descripción. 3) La digitalización de la documentación mediante escaners de gran formato de los planos que así lo requieran. 4) La aprobación de normas archivísticas referidas a este tipo de documentos, como tablas de plazos de guarda. 5) La

³ Para más información sobre estos grupos de edificios del plan de proyectos y obras de la UNLP se puede consultar: http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/libro_plan_obras_introduccion.pdf

apertura al público de la documentación correctamente procesada y conservada, y su difusión mediante diferentes tipos de recursos.

Por otro lado, se encuentra en trámite la resolución que creará la Comisión de Selección Documental de la DGCyM con las metas de:

- Identificar las series documentales producidas por la DGCM: pliegos de licitaciones, planos de proyectos, planos de obras, contratos, cómputos y presupuestos, fotografías, entre otras.
- Evaluar la documentación identificada determinando su valor y sus plazos: valor administrativo, valor informativo, valor fiscal y contable, valor legal-jurídico, valor evidencial, valor histórico- testimonial.
- Determinar qué tipo de acceso tendrá la documentación debidamente identificada y valorada.
- Determinar qué documentación se transferirá al Archivo Histórico de la Universidad, siguiendo el Instructivo de Transferencias aprobado por Resolución N° 391/16.

Instrumentos de descripción

Con respecto al registro de planos, se han confeccionado cuatro instrumentos para un primer acceso. Para ello se tuvo en cuenta fundamentalmente: el fondo (procedencia) y el formato documental: planos formando parte de expedientes de licitación o pliegos licitatorios y los rollos de planos, los planos plegados de colección del MOP, y los planos en soporte digital del CEDIAP. Se han considerado los siguientes datos: fondo documental (procedencia documental), tipo documental, soporte (papel, digital), formato, grupo, código de la dependencia, dependencia, edificios/áreas, cantidad, fechas extremas, antecedentes.

Por otra parte, para un acceso más detallado, se procedió a confeccionar un inventario analítico teniéndose en cuenta el formato de la documentación: planos solos del MOP, los planos "sueltos" (individuales) y los planos que forman parte de expedientes de licitación o pliegos licitatorios de la Universidad. Para el mismo se han considerado los siguientes datos (algunos son compartidos, y otros no):

Planos solos (MOP)	Planos que forman parte de expedientes licitatorios o pliegos licitatorios (UNLP)
N° de asiento/registro	N° de asiento/registro
Grupo	N° interno de unidad de conservación (C1-E1) caja 1-estante1

Código de la Unidad Académica	Cuerpo (unidad documental compuesta)
Fecha original/copia	Nº de expediente
Dependencia (unidad académica, instituto, colegio, dirección, museo, biblioteca, guardería, comedor universitario, etc.)	Nº de licitación/concurso
Edificio	Dependencia (unidad académica, instituto, colegio, dirección, museo, biblioteca, guardería, comedor universitario, etc.)
Antecedente (documentos relacionados, dependencias anteriores, expedientes)	Obra
Nº de plano	Documentación relacionada (planos, planillas, fotografías, etc.)
Procedencia	Fojas
Tema (instalaciones, remodelaciones, ampliaciones)	Escala
Descripción (planta, corte, detalles)	Nº de plano
Original/copia	Escala
	Observaciones/notas (aquella información que encontramos y consideramos importante que no iría en ninguno de los otros campos)
Proceso de original/copia	Fecha
Sellos	
Director	
Proyecto	

Dibujo	
Empresa	
Firma	
Escala	
Tamaño	
Catastrales (N° de manzana, de partida)	
Valor artístico	
Documentación relacionada (planillas, etc.)	
Observaciones/notas (aquella información que encontramos y consideramos importante que no iría en ninguno de los otros campos)	
Ubicación (signatura topográfica)	
Digitalización (si el documento ya se encuentra digitalizado)	

Capacitaciones abiertas a la comunidad como apoyo y difusión del trabajo archivístico

Como ya se mencionó, para poder llevar a cabo estas tareas se convocó a la comunidad educativa y a la comunidad en general a formar parte de un taller y capacitación en organización de archivos de planos. Entre los meses de septiembre a diciembre del 2016 y junio y julio del 2017, un grupo de talleristas, convocados por el Archivo Histórico y coordinados por Myriam Hara, Ivana Farella y Mariela Amor llevaron adelante tareas en el depósito de planos y procesos básicos de conservación y registro documental.

La convocatoria de voluntarios fue realizada por el Archivo de la UNLP entre estudiantes y miembros de la UNLP. Se invitó a participar a los trabajadores y becarios que se desempeñan en la Dirección de Construcciones y Mantenimiento (DGCM). Se seleccionó a un grupo de diez personas: estudiantes de archivística, trabajadores de otras dependencias de la UNLP, empleados de la DGCyM, alumnos, becarios y graduados de facultades (Arquitectura, Bellas Artes, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Humanidades, Informática) que completaron satisfactoriamente el ciclo. Se entregaron certificados de asistencia a la capacitación.

El objetivo general de estos talleres fue capacitar en técnicas básicas de trabajo en materia de tratamiento archivístico y de conservación preventiva de la documentación perteneciente a fondos o colecciones institucionales, así como reforzar las tareas (emprendidas y estipuladas en el expediente 100-4321/14) que el Archivo Histórico de la Universidad y la Dirección General de Construcciones y Mantenimiento viene realizando en el archivo de obras planas de nuestra Universidad. Asimismo, se buscaba avanzar con las tareas de procesamiento y acondicionamiento de los planos a fin de recuperar información y poder brindar accesibilidad pública a la documentación.

En lo que respecta a las tareas, los talleristas se capacitaron en tres áreas de trabajo, llevando a cabo las siguientes tareas:

- Conservación. Principios de conservación preventiva: limpieza superficial de los documentos y su conservación preventiva (retiro de materiales contaminantes, entre otras).
- Depósito: operación de ordenación archivística, es decir el guardado de la documentación en las unidades de conservación –cajas–, marcaje y la colocación de las mismas en las unidades de instalación –estanterías–, y finalmente el registro de su ubicación –signatura topográfica–.
- Registro. Identificación y descripción archivística (inventario analítico): uso de planillas en soporte papel y en soporte informático (Excel).

En cuanto a la conservación, en el taller se procedió como primer medida a la limpieza superficial de la documentación (cepillo de cerdas suaves), extracción de clips metálicos, reemplazo de guardas (se les transfiere la información referencial que se encontraba registrada en el antiguo papel), descarte de papeles sin información referencial (pueden transmitir acidez al resto de la unidad documental), la confección de algunas guardas primarias a través de un sobre cruz con papel calidad uso médico (papel *Medical Kraft*) fabricado con celulosa pura, con baja porosidad (sin textura, ni blanqueadores ópticos), y el guardado de la documentación en cajas de archivo de plástico corrugado azul (tamaño legajo, 38x28x12cm).

A modo de cierre

Como conclusiones de todo este proceso llevado a cabo, primero que nada nos complace poder compartirlo en esta publicación. No hay mucho escrito sobre procesos

archivísticos sobre obras planas. En segundo lugar, es importante remarcar que el procesamiento archivístico adecuado y las tareas de conservación preventiva colaboran con la puesta en valor de los planos, y son la única forma de hacer posible su accesibilidad pública.

Se proyecta en el mediano plazo el registro y la descripción de la totalidad de los planos, en todos sus soportes (papel y digital), guardados por la DGCyM. Por otro lado, la puesta en funcionamiento de la Comisión de Selección Documental (valoración documental de las series, acceso documental y transferencia de la documentación al Archivo Histórico de la Universidad). Asimismo, la guarda de los rollos de planos en tubos y planeras con calidad de conservación.

En el largo plazo, se proyecta el trabajo más complejo de conservación que incluye la extracción de cintas adhesivas, ganchos metálicos y todo material contaminante presente; la reparación con cinta transparente de papel tissue. Asimismo, se proyecta la digitalización y la apertura pública con un software de archivo a toda la comunidad.

Bibliografía

Amor, M. C. (2013). "Itinerarios de Interpretación Patrimonial (IP) en el ámbito de la UNLP. Hacia una nueva forma de difusión del patrimonio". En *I Congreso Latinoamericano y II Congreso Nacional de Museos Universitarios*. La Plata: Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata.

Belinche, M. F., Panella, C., Casareto, L. M., Jaureguiberry, M. L. (2014). *Memorias de la Universidad: un relato fotográfico sobre la identidad de la UNLP*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Bergaglio, C. y Pené, M. (2009). *Conservación preventiva en Archivos y Bibliotecas*, La Plata: Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires/Archivo Histórico "Dr. Ricardo Levene".

Cervantes, G. D. (2008). *Los documentos especiales en el contexto de la archivística*. México, D.F.

Hermosín Miranda, R. (2011). "Características de los distintos soportes sobre los que se reproducen planos y esferas, Taller de patrimonio documental y bibliográfico, IAPH". En *Revista ph., N.º 77 Monográfico*. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Tanodi, A. (1961). *Manual de archivología hispanoamericana. Teorías y principios*. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.